N.º 389
7 de marzo de 2024
Apoyo: 1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA
Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

¡Alto al genocidio de Gaza!

¡Alto a la guerra de Ucrania!

8 de marzo: explotación de las mujeres inmigrantes

página 10

EDITORIAL

Rearme contra los trabajadores y los pueblos

Desde las instituciones de la Unión Europea y, en particular, en las intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyden, suenan tambores de guerra. En esa cuestión –como en tantas otras– la Unión Europea actúa como una simple correa de transmisión de los intereses del imperialismo americano y de la OTAN. Durante años, la UE ha pretendido falazmente ser una garantía de paz en Europa y un oasis de democracia. Falacia, pues no se puede olvidar su participación en la destrucción de la Federación Yugoslava, en la destrucción del Estado libio, en los planes de austeridad que han aplastado al pueblo griego, impuestos en contra de un voto mayoritario en referéndum, y, después, a los pueblos de España, Portugal, Irlanda. Tampoco podemos olvidar el cierre de fronteras que ha llevado a la muerte a miles de emigrantes. Pero ahora se quita la careta y da un paso al frente: Von der Leyden, por imperativo del imperialismo americano exige prepararse para la guerra. O sea, aumentar cualitativamente los presupuestos militares. El rearme que ya han llevado a cabo todos los países (menos Portugal e Irlanda) en 2023 no basta, es necesario subordinarlo todo al gasto militar, ante la amenaza rusa. Una campaña que se extiende a todos los servidores de la UE, como el europarlamentario "socialista" Glucksmann, que declaraba hace poco que Europa debe "prepararse para una economía de guerra". ¡Menudo cinismo! Claro está, nadie puede confiar en la oligarquía de Putin, pero es totalmente incapaz de repetir en toda Europa lo hecho en Ucrania. Es la OTAN quien organiza la guerra de Ucrania, ha desplegado sus fuerzas y ha multiplicado el número de países que la integran, avanzando hacia las fronteras de Rusia y rompiendo la neutralidad de Suecia y Finlandia.

El Gobierno francés se ha colocado en vanguardia, aumentando 3.000 millones su ayuda militar al corrupto régimen de Zelenski (régimen que ha prohibido todos los partidos y derogado el Código del Trabajo, además de vender tierras a las multinacionales americanas y europeas) e incluso llegó a decir que no excluye el envío de tropas a Ucrania,

¿Cuál es la cuestión de fondo?

No es, evidentemente, y por mucho que nos lo quieran hacer tragar, la lucha en apoyo de la democracia (que encarnaría Zelenski) frente al autoritarismo (que encarnaría Putin). Se trata más bien del control de los mercados, de la distribución del gas y el petróleo, de los cereales, de las materias primas. Se trata, además, en nombre de la necesidad de rearmarse, de someter a la población trabajadora a una cura de austeridad. Vienen a decir: "¿cómo se puede reivindicar si estamos en guerra...?". Y, sin embargo, la economía de mercado (o sea, el capitalismo) necesita la guerra.

Este es el discurso de la UE y de todos los Gobiernos y partidos que se someten a esta política.

Y esto tiene consecuencias en todos los países, más allá de las palabras, en los hechos. En 2023, bajo el gobierno "progresista" los bancos han ganado 26.500 millones de beneficios, por no hablar de las grandes empresas... ¿Y la pobreza? Ha llegado a afectar al 26,5% de la población. Aumentar los gastos militares significa aumentar la pobreza, poner en cuestión salarios, pensiones y servicios públicos, cerrar industrias y abandonar cultivos, y no hay dinero para proteger a los campesinos –en particular, a la mayoría que viven con menos de 5 hectáreas– o realizar simples obras de infraestructura –que por otro lado han sido decretadas– para paliar la sequía.

Estamos aún lejos de esa "economía de guerra". La resistencia sigue, los campesinos por un lado, los pensionistas, los trabajadores de la sanidad, la juventud se movilizan por Palestina y por sus derechos. El debate debe recorrer los centros de trabajo y estudio, las grandes organizaciones sindicales, de la cúpula a la última sección: ¿es posible seguir con la política de diálogo social que lleva a la paralización de los trabajadores, o es necesario, más que nunca, derogar toda la reforma laboral de Rajoy, las reformas que privatizan las pensiones, poner en el centro la consecución de las reivindicaciones y la defensa de derechos y libertades? Es la discusión que hemos emprendido en y desde los colectivos que componen el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.

Preguntar es responder.

Redoblar al lucha por la amnistía

página 7

14 de marzo: conferencia de sindicalistas por la auditoría

página 8

Agricultores: choque de intereses

página 9

Movimiento obrero norteamericano

página 12

INFORMACIÓN OBRERA
Tribuna libre de la lucha de clases

El régimen monárquico es corrupción

Aparte de las fantasías que se inventa el felón de Feijóo, hay hechos graves sobre la corrupción en el Ministerio de Fomento. En un momento de crisis del país porque no había ni mascarillas para protegerse de la covid, de contaminación galopante, los responsables políticos tenían como exigencia acuciante conseguir mascarillas como fuese. Unos empresarios organizaron un negocio para vender mascarillas a precio de oro, conchabados con un alto cargo del Ministerio del Interior que les facilitó el acceso a los responsables políticos que las compraron a alto precio. Y esos funcionarios cobraron por el negocio. Con la enfermedad, con el dolor de los muertos, se forraron.

Dentro del Ministerio se organizó una red, que no se limitó a las mascarillas, sino que hacía negocios a cuenta de la población. Una red corrupta en torno a un alto responsable del Ministerio, Koldo García, con empresarios que chupan sistemáticamente del bote. El que le nombró, ni dimite.

En la administración autonómica de Baleares, sin evidencia de 'comisiones' por ahora, se evidencia el pánico por la falta de mascarillas, los desembolsos astronómicos y urgentes, y está por aclarar por qué tardan tres años en pagarlo. Aparte de lo que se haya llevado el PP después para cancelar la deuda, que eso ya es normal en los franquistas.

Puede haber más, pero lo del Ministerio de Fomento es más que suficiente, por menos que eso dimiten gobiernos en otros países.

Millones de trabajadores no votan al PSOE para esto, y mientras no hay dinero para más médicos, para más profesores, para los servicios públicos más elementales, vuelan durante años los millones robados por una red organizada.

No es el primer caso en gobiernos del PSOE. Lo nuevo es que desde Podemos hasta Sumar son también responsables.

Esta corrupción se añade a la infidelidad fundamental de los gobiernos de izquierda, que es regalar miles de millones a los capitalistas mientras los trabajadores, los campesinos, la juventud sufren el paro y la miseria. Que es la complicidad con el despotismo de jueces y policías franquistas, a los que defienden, incompatible con la democracia. Que es sostener al Estado sionista, aunque se tomen distancias. Los trabajadores, los jóvenes, no les votan para esto. Millones de trabajadores han dejado de votar socialista por las reconversiones industriales y agrarias, por los recortes de miles de millones a los servicios públicos.

Y encima, el Gobierno alberga chorizos como los del PP.

No todo es igual

Lo que ha hecho el PP utilizando a la Policía para destruir las pruebas del choriceo de su gente está a otro nivel, corresponde a la corrupción de 40 años de dictadura, de camarillas que tienen el Estado como suyo, porque lo han creado para oprimir a los pueblos.

No todo es igual. Cuando el Borbón cobra comisiones durante decenas de años por todo el petróleo que España importa, sigue la tradición de su familia desde hace 323 años. Una familia que nunca hasta Juan Carlos tuvo una fortuna, porque el Estado era suyo. Y piensan seguir.

Ahora la CIA ha revelado sus documentos de hace decenas de años, y ahí aparece cómo Juan Carlos era el principal agente de la CIA en España, y entregó el Sahara a Marruecos no porque fuese marroquí, sino para que los Estados Unidos apoyasen su investidura como rey.

¿Quién puede seguir defendiendo esta Monarquía?

El régimen de esta Monarquía es la corrupción.

Koldo García y quien le puso, forma parte de la corrupción de este régimen. Un régimen en que el Estado sostiene económicamente a los partidos. Un régimen que se negó a entregar a los sindicatos su patrimonio para irles soltando dinero a cuentagotas como medio para presionarles y hacerles dependientes.

Aquí hay elecciones y ciertas libertades, los gobernantes pueden satisfacer muchas necesidades de los pueblos, pero el Estado, como el Supremo reitera, es el Estado creado a partir de la sublevación militar de 1936, no tiene otra legitimidad, y como tal forma la Unión Europea. Koldo García, su trama, se apuntan al juego. Muchos dirán que todos son igual.

Lo que queda de las organizaciones creadas por los trabajadores debería servir para formar gobiernos en un marco democrático, si aún valen para ello.

Los trabajadores, los pueblos que quieren ser libres, son incompatibles con la corrupción.

Manuel Cuso

Las elecciones gallegas: consecuencias políticas

Lectura de los votos

Las elecciones gallegas del 18F han registrado una alta participación: el 67,3 % frente al 49 % del 2020.

El PP pierde dos diputados, pero obtiene mayoría en el Parlamento Gallego y consigue 72.729 votos más que hace cuatro años, un 10,4 % más.

El BNG gana seis diputados y 155.734 votos, aumenta un 50 % sus votos respecto a las anteriores elecciones.

El PSdeG-PSOE: pierde 5 escaños y 46.059 votos, obtiene un 22 % de votos menos que en 2020, lo que le supone un serio descalabro.

Y el resto de los partidos: Democracia Orensana, con el 1,03 % de los votos (15.312), obtiene un diputado; Sumar queda muy lejos de sus objetivos; Podemos, se hunde (pierde el 92 % de sus votantes respecto a 2020), y Vox se mantiene.

Hay que tener también en cuenta que el sistema electoral pactado en la Transición privilegia el voto de las zonas rurales. De forma que, si un diputado en Galicia ha supuesto en estas elecciones 18.541 votos de media, al PP cada diputado le ha costado 17.512 votos; al BNG, 18.683; al PSOE, 23.077, y a DO, 15.312. Fácil ver que al PSdeG-PSOE, que recoge proporcionalmente más votos en las zonas industriales de Galicia, los diputados le han salido muy caros.

Pero ¿por qué el PP sigue teniendo mayoría?

La base social de los resultados electorales

En Galicia, el sector agrícola y ganadero supone el 4 % de la producción, mientras la media en España es del 2,6 % de la producción. Además, es una región en la que todavía perdura parcialmente el sistema franquista de dominación, con pequeñas aldeas y poblaciones bajo el control caciquil.

Este sistema de control no se ha modificado en lo sustancial, gobernase quien gobernase; incluso fueron los gobiernos de Felipe González los que liquidaron buena parte de la industria gallega. Y hoy es el gobierno del PSOE y de Sumar el que, sometido al Pacto Verde de la UE, amenaza con terminar con las pequeñas explotaciones.

¿Se puede modificar esta situación?

Pensamos que existen las bases sociales para hacerlo: la industria y la construcción en Galicia suponen el 25,7 % del PIB frente al 22,8 % del conjunto de España; expresión de que existe una mayoría obrera y democrática objetivamente interesada en mejorar sus condiciones de vida y trabajo y en derribar esa estructura caciquil, plenamente integrada en el capitalismo español y europeo.

En estas elecciones, el BNG, que aparecía enfrentado al PP y prometía un cambio social, arrebató 5 escaños a un PSOE sometido al capital financiero y al aparato de Estado franquista, a la Monarquía. Por eso solo el BNG gana votos en número más que significativo.

Esta situación no es diferente a la de los trabajadores del resto del Estado; con cada acontecimiento socialmente relevante se está perfilando una verdadera diferenciación con la política seguida por la «izquierda oficial» que, por el momento, no encuentra cauce para expresarse. Consideramos que tenemos que abrir un debate al respecto, junto a la movilización por las reivindicaciones y derechos más acuciantes. En este sentido, el CATP prepara una conferencia el 27 de abril, conferencia de militantes y organizaciones para debatir campañas y acciones en este sentido, para dar un paso adelante en la construcción de un movimiento obrero por la República.

Blas Ortega

Las elecciones vascas

Las elecciones autonómicas vascas llegan alumbradas por la crisis general del régimen español, por la guerra y el intento de derrotar o incluso de exterminar al pueblo palestino y por tanto los interesados en ellas tienen dificultades para no contradecirse y pelearse incluso en sus propias casas.

Si hacemos caso de lo que se publica estaríamos ante un panorama más o menos así:

1. Todo se juega en el campo llamado *nacionalista vasco* donde la llamada izquierda abertzale (patriótica) organizada alrededor de Bildu estaría a punto de alcanzar o incluso superar al PNV, que sería la derecha del nacionalismo vasco.
2. La representación mayoritaria de la izquierda *estatalista* (así nos llamaban a los no abertzales desde los años sesenta), PODEMOS casi desaparecería siguiendo la estela gallega; la escasa suma de SUMAR apenas se notaría y el PSOE como partido *obrero* se quedaría como está.

Pero los hechos demuestran que también las aguas bajan turbias en uno de los representantes genuinos de los intereses del capital financiero en España, el Partido Nacionalista Vasco, que al contrario de lo que dice su nombre ni es nacionalista ni vasco. Es internacional, inglés en su nacimiento, estadounidense cuando los vientos del capital financiero cambiaron y tiene serias dificultades para aplicar la política que sus amos ordenan ya que ello supone un serio desgaste de su base social.

Es destacable que uno de los elementos de la situación política en que se presentan estas elecciones sea un recrudecimiento nunca visto del enfrentamiento entre el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi, y el PNV, nacidos ambos para combatir al movimiento obrero, a los marxistas y los rojos, incluso contra los *maquetos* (inmigrantes).

También es destacable el papel del PSOE, y no por su conocido papel de comparsa del PNV en Euskadi que le permite simplemente sobrevivir como aparato, sino por la rapidez de los acuerdos con el gobierno central alrededor de las transferencias autonómicas, que prácticamente son ya todas las contempladas en el reparto de beneficios llamado Estatuto de Autonomía de Guernica.

No es casualidad sin embargo que falte una, la principal, la de la Seguridad Social, todos ellos prefieren callar, que no se hable de la ruptura de la caja de la Seguridad Social.

Todos ellos saben que la oposición a la transferencia de la Seguridad Social es masiva incluso entre sus posibles votantes, que se alimenta del malestar por la amenaza de desintegración de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), de la enseñanza pública vendida paso a paso a la Iglesia católica, de la entrega de la ría de Guernica a la multinacional Guggenheim, etc.

Todos ellos saben que con las cuatro manifestaciones diarias de Bilbao, la mayoría de ellas por motivos económicos (defensa de los salarios) existe el riesgo de que se conviertan en una sola, que las abundantes huelgas de resistencia se hagan una, y todos saben que las maniobras constantes para evitar que trabajadores, jubilados e incluso la solidaridad con Palestina caminen unidos los trabajadores y pueblos de todo el Estado cada vez son más cuestionadas.

Sería una ayuda si los salarios, los servicios públicos y hasta la defensa unida del pueblo palestino tuvieran una representación electoral, pero no es así, y a la realidad se la mira de frente.

No habrá candidatura que represente la lucha por la necesaria alianza de trabajadores y pueblos por la república en las autonómicas de abril, pero el 27 de abril militantes vascos de distintos orígenes estaremos en el Encuentro Estatal que el CATP convoca. Eso seguro.

Mikel González y Joseba Izaga, (Bilbao)

Desindustrializar: el futuro que promete la UE

La única industria que va a promocionar la UE, si no se les para los pies, es la industria de guerra. A las órdenes de los EEUU, la sionista Von der Leyen acaba de ordenar a los Gobiernos que gasten más en armamento. Que refuercen las empresas para enviar armas a Ucrania para seguir los dictados de los EEUU. Dinero para la destrucción.

En nuestro país vemos como cada día aparecen nuevos cierres, EREs y ERTEs. Traemos aquí varios casos de ellos. De resistencia también. Los de Schneider nos muestran el camino de la lucha, aunque por muchas razones no hayan conseguido su objetivo. Las leyes favorecen a los empresarios. Los dirigentes sindicales están más preocupados de gestionar la crisis que de combatir los planes de despidos. En este marco la lucha de los compañeros de Schneider es ejemplar. Y no ha acabado. Como plantean los compañeros hay que luchar porque se cumpla el plan industrial que puede salvar un buen número de puestos de trabajo. La clave es no dejar solos y aislados a cada lucha y cada conflicto.

Es exigir al Gobierno su compromiso con la industrialización. Y a nuestros dirigentes que rompan con la mal llamada política de diálogo social que no es más que acompañar los planes de destrucción de la industria. Reunir una conferencia de industria es cada vez mas urgente.

Jesús Béjar

John Deere negocia un ERTE

La dirección de John Deere Ibérica ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas al comité de empresa. La fábrica de John Deere en Getafe (Madrid) cuenta con 1.100 trabajadores que realizan componentes de maquinaria agrícola que exportan a los principales clientes de la compañía que se encuentran sobre todo en las fábricas de cosechadoras de Estados Unidos, Alemania y Brasil, donde alegan una reducción de los pedidos del 25%.

Previamente la empresa ha insistido durante varios meses a la representación legal de los trabajadores en pactar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo mediante un desplazamiento de jornada de hasta 42 días durante este año, a recuperar a modo de calendario irregular en los años siguientes. No hubo acuerdo sobre este tema para el que necesitaba la firma de la mayoría del comité de empresa.

Desde CCOO se viene planteando desde el mes de octubre que en primer lugar es el momento para que la dirección pacte una inversión con el comité de empresa para realizar un plan de formación para toda la plantilla en horario laboral de 20 días de trabajo (160 horas). En segundo lugar, CCOO está señalando que se debe reducir a cero la producción de piezas que habitualmente se realizan en fábrica y que también se están realizando de forma duplicada en proveedores externos en lo que llaman "líneas de contingencia". Esto junto con una reducción significativa del resto del trabajo en el exterior podría suponer prácticamente los 42 días que reclamaba la empresa hasta hace unos días hacer con desplazamiento de jornada.

La empresa de momento ha planteado una regulación de empleo de 133 días a pelo, según la legislación vigente. Amenaza con imponer el ERTE sin acuerdo ante la administración sin compensar económicamente. Tras la reforma laboral, la autoridad laboral, en este caso la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, ya no tiene que autorizar, ni analizar los expedientes de extinción o de suspensión temporal, tan solo los tramita y archiva. Se da la circunstancia que en los 4 ERTEs anteriores que hemos tenido recientemente entre 2015 y 2022, no han afectado económicamente a los trabajadores, se cobraba el 100% del salario, no se reducía la parte proporcional de vacaciones o de días de reducción de jornada industrial (moscosos).

Todo parecía indicar que el plan de la empresa era hacer las dos cosas, primero un desplazamiento de jornada y luego después un ERTE en peores condiciones.

Se da la circunstancia que, en 2023, Deere ha anunciado unos beneficios récord de más de 10.000 millones de dólares. La previsión para 2024, a pesar del descenso en las ventas, es que será el segundo mejor año de su historia con unas ganancias de cerca de 8.000 millones de dólares.

CCOO además ha indicado que, en todo caso, los trabajadores no tienen incidencia alguna en la situación de pedidos y en el crecimiento del stock, que es responsabilidad de la dirección que debería haber reducido el trabajo en el exterior hace meses. Por este motivo, desde el principio hemos planteado que, de ningún modo, ninguna medida que se realice puede afectar negativamente en nuestro salario, en nuestra jornada, en nuestras condiciones sociales y de convenio o en el empleo y los puestos de trabajo.

En John Deere CCOO tiene 9 miembros en un comité de empresa de 23 miembros en el que la UGT tiene la presidencia con 11 miembros y USO tiene otros 3 miembros. Se ha celebrado asamblea conjunta para informar de la negociación y el periodo de consultas acaba el 6 de marzo.

Pablo García Cano

Comunicado del comité de empresa de Schneider tras el acuerdo para el ERE

Hoy acababa el periodo de un mes de negociación del ERE de cierre de nuestra planta presentado por Schneider Electric. Finalmente se ha llegado a un acuerdo con la dirección de la compañía que ha sido refrendado en asamblea por una amplia mayoría de trabajadores, concretamente con el 85% de los votos. Se han mejorado las condiciones del ERE en materia de jubilaciones, recolocaciones, cuantías del despido y un plan de reindustrialización para que no se pierda el tejido industrial que destruye la multinacional de manera caprichosa y así recuperar unos empleos tan necesarios en la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Pensionistas y diputados se solidarizaron con los trabajadores de Schneider en la concentración ante el Congreso de los Diputados

Hemos tratado hasta el final de parar este cierre, pero desgraciadamente no nos ha sido posible. Han sido más de dos años de una lucha dura e intensa y tenemos una gigantesca gratitud para todos los que nos habéis apoyado y luchado a nuestro lado. Hemos aprendido que las luchas tienen que ser en unidad, porque solos no hubiésemos podido aguantar tanto tiempo.

Lamentablemente también hemos comprobado que las administraciones pertinentes no han presionado suficientemente a la multinacional para que diese marcha atrás con el cierre. Ahora deben defender de verdad los intereses y derechos de sus ciudadanos, y les vamos a exigir que se impliquen para que el proceso de reindustrialización, que comienza ahora, culmine con éxito.

Todavía nos queda un año por delante hasta el cierre definitivo y vamos a estar encima de la compañía para que se cumplan con los acuerdos alcanzados. Como siempre decimos, hay que seguir adelante.

Evitar el cierre de Alcoa

Como informamos en el anterior número de IO Alcoa se encuentra en un problema que puede ser grave si la compañía no cumple su acuerdo que firmó en su día con los sindicatos. Ahora plantean que no tienen dinero para cumplir con el acuerdo y busca otras salidas. En palabras del presidente del comité de empresa, J.A. Zan, puede pasar como en las plantas de Coruña y Asturias que fueron cerradas.

Nuevas noticias

Desde el último número de IO se han producido dos hechos significativos. Para empezar una ruenion celebrada en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios de la mayoría. La promesa por parte de todos es evitar el cierre, ir a juicio, lo que supone la intervención de la empresa, si fuera preciso, para evitar el cierre, aunque fuese de una manera temporal.

El otro hecho es que Alcoa ha comprado una empresa en Australia. Ha desembolsado 2.000 millones de dólares lo que contradice lo de que no había dinero. Podría suponer un nuevo cambio de rumbo de la compañía.

JB

No a los despidos en Ediciones SM

El pasado 6 de febrero de 2024, la dirección del Grupo SM en el Estado español comunicó al conjunto de la plantilla la intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas económicas y productivas.

Los argumentos que han expuesto son, por un lado, el cambio del mercado educativo escolar, el sistema de gratuidad de algunas comunidades autónomas, el creciente «no uso» y «segundo uso» del material escolar. Por otro lado, argumentan el descenso de la natalidad, un mercado cada día más competitivo y el mal resultado de la implantación de la última ley educativa, la LOMLOE, que ha provocado una caída de los ingresos. No es un caso aislado, el año pasado la editorial Vicens Vives ya sufrió un proceso similar con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

Para seguir siendo una «empresa sostenible» adoptan una serie de medidas que solo afectan a la plantilla, un ERE que tendrá repercusión en un 25-30% de trabajadoras y trabajadores. Se estima que unas 197 personas serán despedidas con unas condiciones mínimas, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses; asegurando, según ellos, «la continuidad de todos los productos y el funcionamiento de los servicios». ¿Con un 30% de personal menos? ¿a qué coste para la plantilla que se quede en la empresa?

Por parte del conjunto de trabajadores se ha mostrado el rechazo total a esta medida de destrucción de empleo. En la primera asamblea informativa, la totalidad de la mesa de negociación (no todas las empresas del grupo tienen comité de empresa) ha señalado la necesidad de expresar el descontento con diferentes acciones, pidiendo a la empresa que se replantee la responsabilidad de los directivos por los resultados de una errónea estrategia y decisiones quivocadas en los últimos años que nos han llevado a esta situación y no solo la situación del mercado educativo. Se plantea por parte de la plantilla tomar medidas de presión de cara a la negociación colectiva, algunas ya se están llevando a cabo en estos días como paros en las distintas sedes, lazos negros, pancartas, etc.

Desde la parte social lo que se pide es que no se llegue a ejecutar el ERE, rebatiendo los argumentos económicos de la empresa. Se busca, en todo caso, obtener la posibilidad de bajas voluntarias y prejubilaciones como opciones preferentes.

Queda claro que la reivindicación de los derechos de los y las trabajadoras, la defensa de nuestros puestos de trabajo y de unas condiciones dignas de trabajo pasan por la organización.

DM

INFORMACIÓN OBRERA
Tribuna libre de la lucha de clases

Cada número de *Información Obrera* damos noticias de las movilizaciones de los trabajadores de la sanidad, de sindicatos y usuarios contra el desmantelamiento de la sanidad pública, contra los mismos ataques al derecho a la asistencia sanitaria. Pero las respuestas se dan descoordinadas, regionalizadas; más en respuesta a la indignación que salta aquí o allá que siguiendo un plan de lucha centralizado. Es lo que entendemos que hace falta para derrotar la ofensiva privatizadora: que los dirigentes sindicales se pongan de acuerdo para exigir a los gobiernos autonómicos y al Gobierno central la retirada de todos los recortes y la provisión urgente de los fondos necesarios para reflotar la sanidad pública.

Valencia: Sanidad quiere imponer «las macroáreas»

El 21 de febrero, el Gobierno Valenciano aprobó un decreto ley de «medidas extraordinarias para garantizar la asistencia sanitaria». El decreto agrupa los 24 departamentos de salud existentes en ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) «para que puedan compartir recursos» e introduce la movilidad «voluntaria o forzosa de los profesionales, si hay necesidades en el servicio», promete «medidas incentivadoras» a quienes se les imponga o acepten la movilidad por tiempo no superior a tres meses al año. Dice haber primado «las áreas de difícil cobertura en las que existe un déficit de personal de forma constante y permanente». La falta de personal es constante y permanente en toda la sanidad pública, pero de lo que se trata para la Conselleria es de terminar con el Estatuto Marco del personal sanitario y avanzar con el mínimo de problemas posible en la privatización de la sanidad.

Tras publicar el decreto, convocó de urgencia a los sindicatos para tratar de asociarlos a la aplicación del decreto, pero se encontró con que UGT, CC OO, Intersindical y SATSE se levantaron de la mesa y convocaron movilizaciones el día 5 de marzo por la retirada del decreto para iniciar una verdadera negociación.

Blas Ortega

Podéis leer el manifiesto sindical por la retirada de las macroáreas en:
http://informacionobrera.org/manifiesto-macroareas/

Plataforma ciudadana de Manises protesta ante la Conselleria de Sanidad

El viernes 23 de febrero la Plataforma de Manises (València) en defensa de la sanidad pública y de calidad se concentró frente a la Conselleria para entregar al Sr. conseller 5.231 firmas demandando instalaciones, personal y recursos suficientes para los centros de salud de los 14 municipios de este departamento sanitario que cuenta con una población superior a los 220.000 habitantes.

Como se planteó en la concentración a la puerta de la Conselleria, la Plataforma considera que no basta con la reversión en mayo próximo de la gestión pública del Hospital de Manises, conseguida tras muchos años de movilización frente a los anteriores gobiernos de la Generalitat y que todavía tiene pendiente de transferir a la gestión pública el departamento de análisis clínicos del hospital. También es necesario reducir las listas de espera, así como una suficiencia presupuestaria y de personal sanitario que el nuevo gobierno derechista de la Generalitat no garantiza con los presupuestos aprobados para 2024.

Además, como indican por sí mismas las miles de firmas recogidas en tiempo récord y entregadas el 23F, no es verdad lo que dicen las encuestas publicitadas por la Conselleria sobre satisfacción asistencial de la población, como tampoco lo son los días de espera declarados para recibir asistencia en atención primaria y de especialistas dentro de este departamento sanitario. Unas distorsiones ante la opinión pública que, junto con la falta de información concreta a la ciudadanía sobre la reversión hospitalaria, acentúan las sospechas de que se está provocando un deterioro asistencial generalizado para fomentar las remisiones a la sanidad privada.

En esta misma línea, también se señaló la falta de información y de participación con respecto al plan de reordenación de los actuales 24 departamentos sanitarios en tan sólo 8 macroáreas (ASI), que acaba de aprobar el gobierno de la Generalitat Valenciana. Un plan realizado de espaldas a los sindicatos y a la ciudadanía, que incrementará la movilidad del personal sanitario entre los centros sin garantizar su adecuada cobertura y que definirá al sobresaturado Hospital General de València como nuevo referente de los municipios atendidos hasta ahora por el Hospital de Manises, lo que sin duda multiplicará los problemas de desplazamiento y de asistencia digna de la población residente fuera de València, atendida en Manises hasta ahora.

A la espera de la reunión concertada para principios de marzo con la coordinadora de la Conselleria que se encarga del departamento de Manises, la plataforma avisa que seguirá movilizándose por las reivindicaciones planteadas y en defensa del derecho a una asistencia sanitaria pública de calidad.

Corresponsal

Euskadi: ambulancias en huelga

Buena parte del servicio de ambulancias del Servicio Vasco de Salud - Osakidetza es subcontratado, y los trabajadores de dicho servicio están en huelga indefinida. Una huelga que adquiere caracteres especialmente duros por la aparición de provocaciones policiales y parapoliciales contra representantes sindicales, despidos y amenazas de más despidos, etc. Leemos: "Que sepamos, la empresa tiene varias sanciones firmes por parte de la Inspección de Trabajo y, ahora mismo, la fiscalía de Araba está investigando una, por poner en peligro la vida de los trabajadores y por no poner medios suficientes. Estamos hablando, por ejemplo, de tener en las ambulancias cinturones que no enganchan bien, de falta de medicación a pesar de haberla reclamado durante tiempo, o de reventones en las ruedas debido a su mal estado".

Asier Muñoz, sindicalista y trabajador en dicho servicio ha sido entrevistado en el sitio web GEDAR y dado el interés de su contenido os invitamos a leer la entrevista completa:
https://gedar.eus/es/aktualitatea/gure-baldintzen-alde-ari-gara-borroka-egiten/

Corresponsal

Osuna: contra el desmantelamiento de la sanidad pública

El área sanitaria de Osuna (Sevilla) sufre una grave situación de deterioro de la sanidad pública. Hace unos meses hubo que cerrar el servicio de salud mental por falta de profesionales, una situación que sólo se corrigió tras una huelga de los psiquiatras de toda la provincia.

Ahora, los 9 municipios de la Zona Básica de Salud de Estepa sufren el desmantelamiento de su red de atención primaria. Varios de ellos se han quedado sin médico, o son atendidos por un médico que viene por las tardes haciendo horas extra y sin ninguna continuidad. Existe un riesgo cierto de cierre de varios centros de salud, que dejaría a poblaciones sin asistencia sanitaria, teniendo que desplazarse a otro pueblo para cualquier consulta.

En estas condiciones, la Marea Blanca de la Zona Sur de Sevilla convocó una manifestación de todos los pueblos en Osuna (cabecera de la comarca), contando con el apoyo de numerosas organizaciones políticas y sociales. Se sumaron a la convocatoria la casi totalidad de los alcaldes de la comarca, y muchos Ayuntamientos colaboraron activamente en la preparación de la manifestación.

El día 24, a las 12, en la Plaza Mayor de Osuna, donde esperaban los manifestantes de la localidad, confluyeron tres columnas de participantes de los otros pueblos. Desde allí, la manifestación se dirigió hacia al hospital, donde tuvo su fin con las intervenciones de representantes de la Marea Blanca de la Zona y de la marea de Andalucía.

La movilización de los pueblos de la comarca, implicando las principales organizaciones políticas, sindicales y sociales de la zona, demuestra que hay voluntad de defender una conquista social fundamental, como la sanidad pública. Ahora, hay que preparar, en todas partes, la jornada estatal de lucha en defensa de la sanidad que se anuncia para el 7 de abril.

Corresponsal

Madrid: déficit de plantillas en todas las categorías y en todos los niveles

En el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se inició el mes de enero una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre el deterioro de nuestro sistema sanitario público. El objetivo es dejar de normalizar las listas de espera para nuestros profesionales de medicina de familia y pediatría (en algunos lugares de 2 semanas a mes y medio), dejar de admitir que un centro de urgencias extrahospitalarias no tenga médico/a y hacer entender al millón de madrileños en lista de espera hospitalaria para revisión por especialista , prueba diagnóstica o cirugía, que deben reclamar exigiendo disminuir ese tiempo.

Nos proponemos explicar los derechos que tiene la ciudadanía, los que están reflejados en las leyes autonómicas y estatales que no se están cumpliendo.

Esta campaña nos permite contactar con la población explicando la verdadera situación: 500 plazas vacantes de medicina de familia y pediatría, la mitad de los servicios de urgencia sin médico/a y el colapso de las urgencias hospitalarias debido al derrumbe de nuestra atención primaria. Déficit de plantillas en todas las categorías y en todos los niveles y esto pone en peligro la salud y la vida de los que aquí vivimos.

La reclamación se puede hacer online (entrando en Consejería de Sanidad -reclamaciones) o bien en papel y para ello nosotros hemos utilizado el mismo formato oficial, elaborando 4 textos diferentes relacionados con demora en medicina de familia y en pediatría, falta de equipo completo en urgencias extrahospitalarias y demora en atención hospitalaria. También contamos con una instancia sin texto, para que la persona que lo desee exponga su particular exigencia. Ha sido y seguirá siendo un trabajo en equipo, donde es necesaria la participación de muchas personas en muchos lugares. Cada día se suman nuevos colectivos, estamos sintiendo un "efecto contagio" en nuevos barrios y pueblos, como si despertásemos del letargo, lentamente. Estamos creando una red potente de vínculos, desde el cuidado y el respeto, codo con codo y con un objetivo común claro: la sanidad pública, que está por encima de todas nuestras diferencias.

Ya hemos conseguido en estos 2 meses 4.500 reclamaciones que han sido entregadas en la Consejería de Sanidad, con alegría y orgullo por parte de nuestros colectivos.

La campaña continúa y sabemos que es de largo recorrido, tendremos la fuerza necesaria porque somos testigos de que su negocio, la privatización, nos priva de nuestros derechos. Porque son muchas las personas que fallecen esperando su turno en hospital y su valoración de dependencia, porque ya tenemos que lamentar demasiadas muertes en servicios de urgencias sin médico, porque en las residencias murieron abandonadas 7.291 personas, sin atención sanitaria, mientras que trasladaron a hospitales a los residentes que tenían seguro privado, porque no vamos a permitir que nos despojen de nuestro bien más preciado, donde todas las personas tienen el mismo tratamiento y derecho a la vida.

Sanidad Pública o barbarie.

Ana Encinas, médica de atención primaria,
Grupo de Reclamaciones de Vecinas
y Vecinos de Barrios y Pueblos

Endogamia en las universidades españolas, ¿qué hay de cierto?

Hay un debate establecido sobre el funcionamiento de las universidades en la búsqueda de "talento" para la investigación, que implica los procedimientos de selección y concesión de becas en grupos de investigación. A su vez, esto afecta a las relaciones que se dan en la universidad en el proceso de obtención de plazas para personal docente, desde profesores asociados a catedráticos. Las universidades españolas se estructuran con una jerarquía que va desde los rectores (máxima autoridad de una universidad) hasta el personal docente (que cuenta también con su propia jerarquía).

Durante la última década se han hecho públicos varios estudios y casos alarmantes sobre ‘’enchufismo’’ en las universidades públicas españolas. Según una reciente publicación de *El País* existe un fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas, el cual expone 50 carreras universitarias construidas a base de colaboración con algún familiar cercano. El artículo relata uno de estos casos de esta forma: "José Antonio Sotelo, catedrático de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resume en una frase la trayectoria de su familia: 'Todo lo relacionado con nuestra actividad profesional se halla sustentado en la estricta legalidad vigente'. Él coordina un doctorado del Instituto de Ciencias Ambientales que dirigió y que ahora lidera su hijo Ignacio. Este, licenciado en Derecho, aunque con sendas tesis en Derecho (2019) y Geografía (2020), una codirigida y otra dirigida por su padre, trabaja como profesor ayudante doctor, un puesto abajo del escalafón académico pero suficiente para ocupar el cargo directivo. 'Fue un proceso electoral en toda regla, con calendario, presentación de candidaturas, día de votaciones...', explica la UCM. Según el portal de la universidad, ha firmado 13 de sus 38 artículos con su padre y su hermana María, y otros 17 solo con ella, ahora profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. María, por su parte, signa otros 12 artículos con su padre entre otros autores. Los tres aparecen como vocales de la Real Sociedad Geográfica".

Dichas prácticas se establecen dentro de lo legal, ya que la ley universitaria solo impide la intromisión de familiares cercanos a la hora de evaluar una tesis, pero no a la hora de que un familiar dirija la tesis o que incluya a otro familiar en su grupo de investigación. Existen otros argumentos que tratan de explicar la endogamia universitaria, como los datos que apuntan que la mayoría de los profesores han hecho carrera en la misma universidad donde estudiaron. A lo que nos preguntamos: ¿realmente existe un funcionamiento endogámico en las universidades?

Por lo que hace al primer planteamiento expuesto en este artículo podemos indicar como la existencia de 50 casos de este tipo no puede hacer de la excepción la regla. Es decir, que se den casos de supuestos enchufismos entre familiares solo demuestra que un pequeño porcentaje puede aprovechar su posición de poder en el proceso de selección de futuros académicos. En cuanto al alto porcentaje de profesores que se forman y hacen carrera profesional en la misma universidad hay que tener en cuenta que el profesor es un trabajador más, que busca trabajo en su entorno social como cualquier otro. La idea de un profesor universitario trotamundos, que ha ejercido en diferentes universidades por su vocación a la formación y la investigación, responde a la idea del "profesor brillante" promovida por el sistema de los EE. UU.

Uno de los problemas fundamentales de la degradación de la calidad de las universidades españolas es la ‘’fuga de cerebros’’

Universidades de otros países o privadas de aquí fichan a los mejores profesionales formados en universidades públicas españolas porque aquí no existen buenas condiciones laborales ni plazas suficientes para cubrir las necesidades. La escasez de becas para realizar el doctorado, una media de 7 años para acceder a un contrato temporal como ayudante doctor son realidades determinantes para comprender el difícil camino de años bajo la precariedad que sufren los profesores universitarios.

Bajo el alarmismo de la endogamia se trata de tapar el déficit que arrastra la universidad pública en España. Tenemos un sistema universitario que tiene el potencial que genera no lo aprovecha, hay una escasez brutal de recursos para atraer a los mejores profesionales e incluso para mantener a los propios que él mismo ha formado frente al sector privado. Se puede discutir sobre la gestión universitaria, sin duda, pero hay una premisa aplastante: la insuficiencia de medios, agravados por los recortes de 2010 nunca revertidos, deja en la estacada la universidad pública.

Víctor Iniesta

Salvador Puig Antich, el último asesinado ‘’legal’’ del franquismo

EL 2 de marzo de 1974 era asesinado Salvador Puig Antich en la cárcel Modelo, en Barcelona, hace justo 50 años. Su verdugo lo ejecutó con el garrote vil, el mismo día que también era ejecutado Michael Welzel (conocido como Heinz Chez), acusado de matar a un guardia civil. No fue casualidad, la prensa franquista comparaba a los dos ejecutados como delincuentes y asesinos de policías para esconder el verdadero móvil político del asesinato a Puig Antich. La efervescencia social del momento obligaba al Régimen a "justificar", aunque fuera de forma chapucera, la represión. La intensificación de la lucha de clases con el surgimiento de una juventud combativa y la formación de diferentes organizaciones políticas tenía contra las cuerdas a Franco. En este contexto es donde se produce la detención de Puig Antich. Policías de la brigada político-social sin preparación previa (es más, no llevaban ni grilletes), asaltan al joven Puig en un portal de la calle Girona de Barcelona. Un agente del régimen muerto es el resultado, aquí empieza la concatenación de injusticias. Una autopsia hecha en la comisaría de policía, una declaración de los hechos de Puig Antich cuando las heridas de la mandíbula no le permitían hablar, la no aceptación de pruebas de balística y un largo etcétera.

Un acto recuerda en la cárcel Modelo la ejecución hace 50 años de Salvador Puig Antich

La intención no es mostrar las irregularidades o la corrupción más absoluta, sino que el significado político del asesinato de Puig Antich sigue teniendo más vigencia que nunca. El auge de las movilizaciones hacía crecer el entusiasmo de hacer caer al Régimen, e incluso para diferentes organizaciones revolucionarias ir más allá atacando al Estado en sí como defensor del capital. Los llamados procesos de Burgos contra militantes de ETA provocaron grandes movilizaciones que obligaron a conceder el indulto a los 6 presos. Existían pequeñas victorias que daban impulso al movimiento obrero en la lucha contra el franquismo.

«Han matado a Carrero Blanco y me han matado a mí»

Esto responde Puig Antich, en una de sus cartas ya en la cárcel, cuando ETA mata a Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973.

Uno de los muchos ejemplos que demuestran la suicida política y estrategia de ETA. Pero el encarcelamiento de Puig Antich no tuvo la misma respuesta por parte de las masas traducida en movilizaciones, como sí la hubo en reacción a los procesos de Burgos. Obviamente por la respuesta de las organizaciones que representaban a la vanguardia del movimiento obrero, el acuerdo para su legalización y la integración en el futuro régimen ya era uno de los objetivos de sus direcciones. Ni el PSUC en Cataluña, ni el PCE y PSOE en el resto del Estado movieron un dedo por la liberación de Puig Antich.

Carlos Rey González fue el redactor de la pena de muerte que dictaminó el consejo de guerra en 1974 contra Puig Antich. Actualmente ejerce de abogado y, en su momento, fue beneficiado por la Ley de Amnistía de 1977. Destaca su papel como abogado de la exlíder del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho en el caso *Método 3*, dentro de la conocida como *Operación Cataluña*. Más allá de esto, uno de los verdugos de Puig Antich está totalmente integrado en el mundillo judicial, además de ejercer de profesor de derecho en la UIC (Universitat Internacional de Catalunya). Él mismo declaró en el diario *Ara* en 2014 que no se arrepentía de lo que había hecho, que entraba dentro de la legalidad de entonces e hizo lo que tenía que hacer. Tanto en 1999 como en el 2007, el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional se posicionan en contra de la nulidad del consejo de guerra que sentenció a Puig Antich. Hechos que demuestran que no solo el poder judicial del Estado no es imparcial, sino que no tiene ninguna voluntad en condenar los crímenes del franquismo y que, al no hacerlo, les hace cómplices.

La figura de Puig Antich es una referencia de la lucha contra el franquismo de las generaciones que lucharon contra él, pero también debe enseñar a las nuevas, a la juventud de ahora. No podemos hablar de democracia ni de justicia sin desprendernos de los corruptos y verdugos que asesinaron a miles de luchadores como Salvador Puig Antich.

Jóvenes por la ORJ

«Vamos a luchar hasta parar la guerra lo antes posible»

Entrevistamos a Braddedine y Mohamed vecinos de Basauri

Acudieron a la manifestación en defensa del pueblo palestino en familia, con las pancarta y carteles del CATP. Nos han concedido una entrevista explicándonos sus motivos…

Información Obrera: *Vemos una gran masa de jóvenes trabajadores que sale a la calle contra el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué representa para vosotros esta lucha?*

Braddedine y Mohamed: Para nosotros es todo, tenemos que conseguir el alto el fuego, que dejen de matar personas, a los niños y bebés, mujeres embarazadas. Luchamos para que haya justicia en el mundo, justicia para las personas que sufren por las armas, que pierden familiares.

Nosotros apoyamos al pueblo palestino sabiendo que los gobiernos del mundo no sienten nada por lo que está ocurriendo, sino que apoyan la guerra. Nosotros vamos a luchar hasta parar la guerra lo antes posible.

IO: *La exigencia principal es la ruptura de nuestro Gobierno con el Estado de Israel a todos los niveles, pero también es un hecho la complicidad de los países llamados «árabes». ¿Qué pensáis sobre esto?*

ByM: España debe cortar relaciones con Israel y los países árabes son cómplices en la venta de armas, son Gobiernos corruptos.

IO: *Las movilizaciones continúan, ¿creéis necesaria la creación de comités o grupos de apoyo para organizar a la juventud*?

ByM: Sí, es necesario, los jóvenes deben hacer resistencia y explicar al mundo que se manipula mucho la información de atrocidades del Ejército israelí y sus cómplices los americanos.

INFORMACIÓN OBRERA
Tribuna libre de la lucha de clases

Votaciones en el Congreso de los Diputados sobre Palestina

El Congreso ha votado una proposición no de ley (que no obligaría al Gobierno a su cumplimiento). La propuesta incluía diversas medidas, solo una de las cuales ha sido aprobada (la que pedía la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza). Las demás fueron rechazadas porque han sumado sus votos en defensa de Israel y su política los componentes del bloque de derechas del PP, Vox y Junts.

Estos han sido los resultados de las votaciones:

1. Proceder a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel hasta que cese la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania. A favor, 37; en contra, 310; abstención, 0. No se aprueba. Votaron en contra PP, PSOE, Vox, ERC, Junts, PNV y Agustín Santos Maraver, de SUMAR.
2. Efectuar la suspensión inmediata del comercio de armas con Israel. A favor,166; en contra, 176; abstención, 0. No se aprueba. Votaron en contra PP, Vox, y Junts.
3. Redoblar los esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluyendo la coordinación a nivel europeo para el envío conjunto de ayuda y su lanzamiento por vía aérea sobre la Franja. A favor, 312; en contra, 33; abstención, 1. Se aprueba. Votó en contra Vox.
4. Promover en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones económicas ejemplares contra los responsables de los crímenes cometidos en Gaza, y en toda Palestina, desde el 7 de octubre, incluyendo autoridades del Gobierno de Israel y colonos de asentamiento ilegales. A favor,170; en contra,177; abstención, 0. No se aprueba. Votaron en contra PP, Vox, y Junts.
5. Promover en el seno de la Unión Europea la adopción de un embargo total de armas a Israel en todo el territorio comunitario. A favor, 169; en contra, 178; abstención, 0. No se aprueba. Votaron en contra PP, Vox, y Junts.
6. Promover la suspensión del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel. A favor, 38; en contra, 189; abstención, 120. No se aprueba. Votaron en contra PP, Vox, ERC, Junts, PNV. El PSOE se abstuvo.
7. Apoyar la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, y los procesos de rendición de cuentas de sus responsables ante la Corte. A favor, 170; en contra, 177; abstención, 0. No se aprueba. Votaron en contra PP, Vox, y Junts.

Las votaciones ponen de manifiesto un bloque prosionista con el PP, Vox y Junts, al que se suman ERC, el PSOE y el PNV en el tema de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. pero hay una cuestión más: si el PSOE y Sumar han votado a favor de la suspensión inmediata del comercio de armas con Israel, y de apoyar la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre y los procesos de rendición de cuentas de sus responsables ante la Corte, ¿qué impide al Gobierno tomar esas dos decisiones de inmediato? A menos que el voto haya sido, simplemente, una medida de cara a la galería.

Luis González

Acto en apoyo a Palestina en Getafe

El pasado 23 de febrero se celebró un acto convocado por el comité de Getafe de apoyo a Palestina en el Centro Cívico de la Alhóndiga. A pesar de no ser el mejor día, un viernes con vacaciones escolares, hubo unas sesenta personas. En el acto intervinieron representantes de BDS y de la asociación de presos palestinos Samidoun y al final hubo un pequeño concierto a cargo de un cantautor.

El comité de apoyo a Palestina de Getafe se reúne regularmente y promociona diversas actividades. En el terreno institucional apoyando proposiciones para el pleno. Ya es el cuarto pleno que trata alguna proposición. También apoyando las diversas movilizaciones, convocadas por unos y otros, no entrando en la división actual.

La represión

También debemos resaltar que unido al combate de apoyo al pueblo palestino y contra la masacre en Gaza hemos conocido un aumento de la represión contra la juventud, especialmente si va identificada con algún pañuelo o ropa palestina.

Nos hemos dirigido a la Delegación de Gobierno de Madrid para pedir explicaciones y que cese el acoso policial. Esperamos la respuesta para enviar una delegación.

Por la unidad frente a la división

Ya conocimos la división de convocatorias en el mes de enero. Mientras unos grupos convocaban concentraciones provinciales el 18 de enero, otros convocaron concentración estatal en Madrid el 25. Muchas consideraciones había detrás de las distintas convocatorias. Ninguna que justificase la división. Posteriormente CCOO y UGT, con SUMAR y PSOE convocaron otra manifestación el día 17. Hay que agradecer que por una vez hagan algo, aunque fuese tan light en las consignas. El sector más izquierdista se opuso a esta manifestación y algunos la denunciaron e incluso un grupo fue a contramanifestarse. Por parte de los sindicatos y el PSOE y SUMAR se lo tomaron poco en serio y fue muy poca gente. Los de SUMAR se fueron de la manifestación después de hacerse las fotos con pancarta y todo.

Se juntan el hambre con las ganas de comer. ¿Cuántos muertos hacen falta para dejar de instrumentalizar esta lucha?

Alto al genocidio. Romper con Israel. Desde el río hasta el mar Palestina vencerá.

Corresponsal

30 de marzo: Día de la Tierra Palestina

El 30 de marzo de 1976, la población palestina convocó una huelga general para protestar contra el robo sistemático de tierras palestinas que Israel llevó y lleva a cabo. Ese día, 7 jóvenes palestinos fueron asesinados por las autoridades israelíes.

Este año, el 30 de marzo será más fuerte por la movilización de los pueblos del mundo con Palestina. Es trágico por el asesinato masivo diario de niños, mujeres, hombres palestinos, a los ojos de todos.

Por eso habrá una movilización mundial por el alto el fuego inmediato, incondicional, permanente.

Para ayudar a unir fuerzas, hay una marcha digital mundial del 1 al 16 de marzo.

Este último día en Madrid la Asamblea Madrid con Palestina organiza una jornada con concentración, acto político, comida palestina y concierto, en Oporto.

En el Estado español, por la dispersión vacacional, el 30 habrá actos conmemorativos. El de Madrid está previsto tenga lugar a las 12 en el Jardín de Palestina.

Pero la movilización masiva se traslada al:

6 de abril, gran movilización por Palestina

La Asamblea solidaria con la resistencia palestina, de ámbito estatal, convoca esta movilización estatal en Madrid a las 12, en Legazpi. Se dirige a todos los que están organizando movilizaciones, para que desfilemos ese día todos unidos. Colectivos de diversas provincias han comprometido ya su participación. Dada la proximidad de los días de vacaciones de Semana Santa, es importante organizar la movilización en las semanas anteriores.

Madrid, 21 de marzo:

acto en defensa de Palestina

a las 19 h. en Av. de América 25 (sede de UGT)

Cientos de jóvenes, trabajadoras y trabajadores, defensores de la libertad están organizando día tras día las acciones por Palestina.

Astrade, Tribuna Socialista, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos convocan un acto de debate democrático e invitan a que se incorporen otros colectivos u organizaciones a esa convocatoria. El lugar, sede de uno de los dos grandes sindicatos, indica que la convocatoria se dirige ante todo a sindicalistas, aunque no exclusivamente. La formación en los Estados Unidos de un bloque de sindicalistas por Palestina subraya la importancia de movilizar a los sindicalistas para arrastrar a toda la población. El momento en que se convoca recoge la urgencia de extender la movilización y de dirigirse al Gobierno.

Ese día vamos a debatir para ayudar a precisar los objetivos y los medios de esta movilización, apoyándonos en los 4 puntos definidos por la Asamblea solidaria con la resistencia Palestina (Alto al genocidio, alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, con la resistencia palestina, ruptura total de relaciones de España con Israel).

La discusión tendrá presente tanto la situación en Palestina como el desarrollo de la movilización en todo el mundo, y las movilizaciones inmediatas.

Manuel Cuso

Cambrils por Palestina

Con más de 50 asistentes, el pasado día 19 de febrero, se realizó un acto en Cambrils en solidaridad con el pueblo palestino. En el acto, organizado por la CATP, con el apoyo de ERC y PODEM, intervinieron: Amina Shoman y Salma Al Dabag por la Comunidad Palestina Árabe Unida de Tarragona y Dominique Salomon, la portavoz en Catalunya de la Asociación de Judíos y Palestinos. Tras un interesante debate en el que intervinieron entre otros el responsable de *Información Obrera* y el Diputado de ERC por Tarragona, así como miembros de la comunidad musulmana, fue constituido el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino y por la Ruptura de Relaciones de Cambrils, que convocó su primera reunión el 4 de marzo.

Corresponsal

Acto en Pallejà

El pasado 23 de febrero, en el centro cívico de El Castell de Pallejà (Baix Llobregat) fue realizado un acto en solidaridad con el pueblo palestino bajo el título de "Pallejà con el pueblo palestino". En el acto, al que asistieron una veintena de ciudadanos/as, intervino Aritz García, politólogo y máster en Relaciones Internacionales, especialista en colonialismo y militante internacionalista de Sodepau con larga experiencia en Palestina, el cual nos dio una lección magistral sobre la historia de los últimos 150 años de Palestina. También intervino Dominique Salomon, la portavoz en Catalunya de la Asociación de Judíos y Palestinos, aportando su testimonio personal como descendiente de judíos asesinados en el campo de exterminio de Auschwitz, y explicando cómo abrazó la causa palestina frente al racista Estado sionista de Israel. Antes de finalizar el acto, compañeros y compañeras asistentes decidieron a propuesta de la mesa y de los organizadores (CATP, ERC, PODEM) constituir un comité que dé continuidad a la solidaridad con el pueblo palestino.

Corresponsal

Movilizaciones en Barcelona

De nuevo decenas de miles de manifestantes recorrieron el Paseo de Gracia (en el centro de Barcelona) para exigir el alto el fuego, acabar con el bloqueo y en apoyo al pueblo palestino.

Hay que resaltar que se pusieron en el centro las responsabilidades de los Gobiernos europeos, y dentro de ellos el español, por su complicidad en los hechos. Es por ello que se generalizó la exigencia de acabar con el comercio de armas e incluso la ruptura de relaciones con Israel.

La manifestación demostró que la movilización sigue en pie. De hecho, el viernes 29, ante la masacre de los «sacos de harina» del jueves 28, se convocó de urgencia una concentración delante de las oficinas de la Unión Europea: «Israel asesina, Europa cómplice»

Corresponsal

28F: Día de Andalucía por Palestina

El miércoles 28 de febrero, como todos los años, se celebró la manifestación en conmemoración del día de la Comunidad Andaluza. Unas 10 000 personas, según los organizadores, recorrieron las calles céntricas de la ciudad de Sevilla en la convocatoria de carácter regional y donde pudimos ver a representantes de primera fila de organizaciones como Podemos, Adelante Andalucía, IU, Sumar y otras.

Este año, la convocatoria estaba impregnada además, de los problemas diarios de los trabajadores andaluces: sanidad, enseñanza, servicios públicos…, de la situación por la que pasa la población palestina; tanto es así, que la prevista convocatoria del 25 por Palestina se trasladó a este día, haciéndolas coincidir.

Llamativo fue que hubieran dos bloques perfectamente diferenciados, el primero y cabecera, que podría ser un 35% de la manifestación y donde se encontraban las organizaciones mayoritarias, donde las consignas centrales consistían en reclamar al presidente andaluz la solución de las reivindicaciones pendientes. Alguno pensaría dónde estaba la parte alícuota de responsabilidad del Gobierno central, al que no se mencionaba por ningún lado.

El segundo bloque, mayoritario, era en el que ondeaban las banderas y pancartas palestinas y estaba compuesto por una multitud variopinta, uniéndoles el grito central de "no es una guerra es un genocidio".

P. Gallego

Pero ¿quién legisla en España?

La sacrosanta e intocable Constitución española manifiesta en su Art 117.1 que "La justicia emana del pueblo" y remata "se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Veamos con ejemplos:

La justicia emana del pueblo.

Suponiendo que los diputados de las Cortes representan la voluntad de los ciudadanos, el año 2006 aprobaron el Estatuto de Catalunya.

En junio del mismo año la voluntad del pueblo de Catalunya lo refrendaba.

Pero "se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Es decir, que la voluntad del pueblo, sea de forma directa sea de forma indirecta, es retocada y adaptada por unos señores, de un cuarto poder, porque ni siquiera dependen del Poder Judicial, por su condición de inamovibles, responsables e independientes.

Lo de inamovibles queda claro, algunos de ellos no han sido renovados como establece la Constitución, (todos conocemos la situación de bloqueo de las renovaciones de los miembros del CGPJ y por ende de los miembros del Tribunal Supremo que deben proponer para que el rey lo ratifique). ¿Pero responsables e independientes?

Como consecuencia de su sentencia, más de un millón de ciudadanos catalanes nos echamos a la calle el 10 de julio de 2010, en protesta de la misma. Una tomadura de pelo, ¿para que votó el pueblo catalán si luego los jueces del Tribunal Supremo lo "cepillan"?

Se podrían explicar muchos más supuestos, pero sin duda, quien deja al desnudo al Poder Judicial es la propuesta de ley de amnistía.

Desde que se supo de que se iba a proponer, salieron todos los estamentos judiciales en tromba en su contra, para imponerse como un muro infranqueable. Sin respetar lo que piden para ellos, los principios más elementales de la justicia, a saber: independencia y responsabilidad.

Como vemos su independencia y responsabilidad es la de poder juzgar una ley antes de ser siquiera conocida o debatida en el Parlamento (recordemos que la justicia emana del pueblo).

Y sin ningún prejuicio en atribuir nuevos delitos a quien pudiera ser amnistiado, como el de terrorismo.

Ahora resulta ser que las movilizaciones realizadas hace 5 años, en particular la del 14 de octubre de 2019, convocadas por el "Tsunami democratic", pudieran constituir actos de terrorismo de sus dirigentes.

¿De verdad? ¿nos toman el pelo? Si no fuera por la gravedad de la situación estaríamos ante una nueva película de Berlanga. ¿Hasta ahora no se dieron cuenta? ¿casualidad? No, sin duda no hay casualidades, los jueces se adelantan incluso al PP, en defensa del régimen monárquico español. No pueden tolerar que nadie desdiga sus decisiones. Y menos que se le haga tragar al propio monarca las amenazas del 3 de octubre de 2017

"Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

Hemos tocado hueso

Y mientras Junts decide que hacer, Daniel Gallardo, condenado a prisión por manifestarse contra la sentencia condenatoria de los dirigentes del "procés de Catalunya" es de nuevo interpelado para su ingreso en prisión.

Le corresponde a todas las organizaciones, políticas y sindicales, que se reclaman de la democracia, redoblar el esfuerzo para que la justicia que emana del pueblo sea cumplida. Sin amnistía no hay democracia. Digan lo que digan los jueces y firme la sentencia quien la firme, aunque sea el mismísimo rey.

Eva Clara

Redoblar la lucha por la amnistía

La campaña por la amnistía que partió del documento del acto celebrado en la librería Blanquerna de Madrid el 27 de noviembre ha recogido ya más de 200 apoyos y ha celebrado numerosos actos a lo largo de todo el Estado.

Podéis seguir la campaña y dejar vuestro apoyo en nuestra web:
http://informacionobrera.org/campanas/redoblar-la-lucha-por-la-amnistia/

Os informamos en esta página de algunos actos que se están preparando.

Preparan un acto en Valencia

El lunes 11 de febrero, a las 18:30, se realizará la presentación de la campaña por la amnistía en La Morada (Avda. de la Constitución, 43 de Valencia). Presentará Adrián Navalón e intervendrán Blas Ortega, del CATP, y Erika G. Wilson, de Podemos.

En el acto público, se dará a conocer la iniciativa puesta en marcha tras la charla y debate organizada por el CATP en la librería Banquerna de Madrid el 27 de noviembre de 2023. Desde nuestro punto de vista, se trata de ampliar la lucha por conseguir que todos los detenidos por el Procés sean amnistiados, pero también de defender las libertades democráticas cuestionadas por el aparato judicial y represivo heredado de la dictadura.

Esta es, sin duda, una de las cuestiones que está en el centro de la actual situación política y que requiere la unidad de los trabajadores y los pueblos de España, de todas las organizaciones obreras y democráticas para conseguir una verdadera ley de amnistía y la derogación de toda la legislación que recorta y suprime las libertades, en particular, la Ley Mordaza.

BO

Amnistía, nada ajeno a Euskadi…

Tras la primera recogida de firmas que aportamos al manifiesto «Redoblar la lucha por la Amnistía » celebramos una primera reunión en el Centro Municipal de La Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao. Se trataba de poner en común la experiencia y no defraudó: si hubo quien preguntaba por qué no decíamos ex profeso amnistía para los presos vascos, preguntaba por el carácter de algunos de los dirigentes catalanes.

Acordamos un plan de continuidad sencillo: recogeríamos 50 firmas más y nos volveremos a reunir.

Tasio Aritza, Bilbao

La Asociación Cultural OMNIUM presentó el pasado día 26 de febrero en la plaza del Rey de Barcelona el manifiesto "Protestar no es terrorismo" ", en respuesta a las últimas investigaciones de la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic, que pretende imputar a sus dirigentes por actos de terrorismo para evitar que puedan acogerse a la ley de amnistía criminalizando todo tipo de protestas. El manifiesto ha sido suscrito por los periodistas Andreu Buenafuente y Jordi Évole, el actor Carlos Bardem y los músicos Joan Dausà, Santi Balmes, Nacho Vegas y Fermín Muguruza, así como por sindicatos y más de 200 organizaciones.

Dani Gallardo encarcelado ¡Amnistía!

No es ninguna rareza ni casualidad que el primer encarcelado en la campaña represiva lanzada por el rey y aplicada por el aparato judicial franquista contra el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación sea un joven madrileño, poniendo en evidencia que el régimen actual es enemigo de las libertades de todos, de que no existen marcos autónomos en cuanto a la represión como no los hay en cuanto a la explotación.

Diga lo que diga el señor Puigdemont la lucha contra la represión, por los derechos democráticos, es una prioridad, y de hecho el encarcelamiento de Dani y los juicios a celebrar en los próximos días no serían posibles si la ley de amnistía estuviera ya vigente y si los compromisos de los que hoy forman gobierno y otros que los apoyan sin formar parte de él se cumplieran y la Ley Mordaza hubiera sido ya derogada.

Hasta que la ley de amnistía sea firme, continuamos actuando: infórmate en el sitio web « https://informacionobrera.org/campanas/redoblar-la-lucha-por-la-amnistia/"

AZ

El próximo 14 de marzo 2024 a las 18:30 h. tendrá lugar un Encuentro de Sindicalistas

Debatirán cómo organizar la lucha por la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social.

En el nuestra web encontraréis el manifiesto-convocatoria apoyado por 50 primeros firmantes responsables sindicales y que invita a hacer firmar a compañeros y compañeras sindicalistas (http://informacionobrera.org/manifiesto-de-sindicalistas-por-auditoria/).

Habrá conexión por videoconferencia desde la reunión central de Getafe con distintos locales sindicales en otras localidades. Puedes solicitar el enlace en: sindicalistasxauditoria@gmail.com.

Carta de dos activistas del movimiento de pensionistas dirigida a los diputados

A las diputadas y diputados del BNG, PODEMOS, BILDU, ERC, SUMAR y PSOE:

En la ley de reforma de pensiones de 2021 muchos de vosotros votasteis a favor de realizar, con plazos precisos de realización, una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social desde 1967 a 2019, ambos incluidos.

Los plazos se han incumplido, y las organizaciones de pensionistas mantenemos viva la exigencia de que la Ley se cumpla y que de la auditoría se encargue la institución de nuestro ordenamiento jurídico especializada en la censura de las cuentas públicas, el Tribunal de Cuentas, que ya ha mantenido desacuerdos relevantes sobre las cuentas de la Seguridad Social.

Las reivindicaciones consideradas más urgentes (aumento de las pensiones mínimas, brecha de género, viudedad, etc.) necesitan ser atendidas y así responder a las aspiraciones de muchos pensionistas, particularmente mujeres pensionistas, que viven por debajo de los límites de pobreza.

Frente al reiterado argumento de que no hay dinero para atender esas legítimas aspiraciones, se hace evidente la necesidad de nuevos recursos, que en nuestro país, con un sistema de Seguridad Social basado en el régimen de reparto, deben venir del aumento de salarios con sus correspondientes cotizaciones y de las reservas constituidas en los anteriores años de superávits. Pero ambas fuentes de financiación están cegadas: los salarios de las trabajadoras y trabajadores activos, injustamente, incluso pierden poder adquisitivo, y lo que deberían haber sido las reservas de la Seguridad Social no existen, se desviaron para gastos propios del Ministerio de Hacienda pero impropios de la Seguridad Social.

Por eso queremos que se cumpla la Ley. Queremos que se respete y se cumpla lo que votó el Parlamento. Es necesario que una auditoría permita determinar los importes desviados y las instituciones beneficiadas con los gastos impropios, que sean estas las que soporten con sus recursos el vaciado de las reservas, ahora necesarias para sacar de la pobreza a miles de pensionistas, sobre todo mujeres.

Estos son los razonamientos que queremos compartir con vosotros como señalamos en escrito del 5 de diciembre pasado. Máxime cuando el AIReF anuncia reducciones para 2025, pues para ellos, como para el Banco de España y el sector financiero, nuestra Seguridad Social no es sostenible.

Madrid 21 de febrero de 2024

Juan Miguel Fernández Ruiz, Damián Rodríguez García

«El Gobierno debe cumplir el compromiso de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social»

Reunión de delegados sindicales del Vallés Oriental

Dentro de un ciclo formativo organizado por la Unión Comarcal de la UGT del Vallés Oriental, el pasado día 27 de febrero tuvo lugar en Granollers una reunión a la que fue invitada una delegación de "Sindicalistas por la Auditoría" para explicar por qué hay que exigir al Gobierno que cumpla lo dispuesto en la Ley 21/2021, en relación al compromiso adquirido en la misma de realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. El debate que hubo, muy animado y en el que participaron casi todos los presentes (17 delegados de diferentes empresas), mostró entre otras cosas el descontento con las reformes introducidas en el sistema público, que han tenido como resultado una merma en la cuantía de las pensiones, a la par que alargar la edad de jubilación. Medidas todas ellas adoptadas por los Gobiernos, bajo el argumento falaz de que el sistema público de pensiones es insostenible. Insostenible, en todo caso, por el saqueo al que se ha sometido la caja de la Seguridad Social, a la que se le ha hecho asumir gastos impropios, cifrados por el Tribunal de Cuentas y el propio Ministerio en más de 100.000 millones de euros.

Todos los presentes mostraron su conformidad con la necesidad de exigir al Gobierno que cumpla su compromiso de realizar una auditoría, contemplado en la citada ley. Los trabajadores, las organizaciones que los representan, no pueden aceptar más reformas ni más recortes. Nuestro sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto, es perfectamente sostenible y suficientemente robusto para hacer frente a las reivindicaciones de los pensionistas.

Todos los presentes, igualmente, manifestaron su interés por participar en la reunión convocada para el próximo 14 de marzo, que se hará presencial para los compañeros de Madrid, y por video-conferencia para el resto.

JAP

7.291 muertos y Ayuso impune

Fueron 74.839 los muertos por COVID en 2020, según el INE. De esa cifra, 19.357 se produjeron en la Comunidad de Madrid, el 26% de las muertes de todo el Estado; siendo los habitantes en Madrid el 14% de la población. Tras las cifras que componen las estadísticas están las víctimas y sus familias.

En estos meses se han cumplido 4 años del inicio de la pandemia y el consiguiente confinamiento general. Todas las muertes fueron dolorosas, tremendas. Pero hay 7.291 víctimas por COVID en Madrid que, además de morir por el virus, sus familias sufren el escarnio del Gobierno de Díaz Ayuso, "iban a morir de todos modos", les ha dicho sin ningún pudor.

De las 19.357 muertes de esta Comunidad, 9.468 fueron ancianos y ancianas que vivían en residencias de Madrid, casi el 50% del total de fallecidos. Pero al 77% de los residentes se les negó la asistencia médica hospitalaria ¿por qué? Porque así lo decidió el Gobierno del PP en Madrid al dictar los conocidos "protocolos de la vergüenza", por los que daba orden a la dirección de los centros de impedir el traslado de los residentes afectados a los hospitales.

Por qué a los otros 2.177 no se les negó la posibilidad de ser atendidos en un centro hospitalario: porque, en su gran mayoría, tenían suscrita una póliza de salud privada.

Lo anterior, en sí mismo, es un hecho intolerable. Es una discriminación de clase social. Un hecho que, por lo visto, a la mayoría de sus señorías, los jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid no les parece suficiente para abrir causa contra los responsables de aquella decisión. Los juzgados están archivando las querellas de las familias y sus asociaciones, sin investigar, sin una sola citación a declarar, sin una sola diligencia previa.

El Gobierno de Ayuso se niega ha hacer públicas las actas que levantó la Policía Municipal. Documentos estos que son un fiel reflejo de la irresponsabilidad y la negligencia criminal de este gobierno reaccionario, que solo está a disposición de las necesidades del capital.

En casos de corrupción, en posicionamientos políticos ("lawfare") y en casos tan graves como los incendios: el restaurante de la plaza de Manuel Becerra de Madrid, en abril de 2023, en el que murieron dos personas, o el de las discotecas "La Fonda Milagroa" y "Teatre", en octubre, en Murcia, con trece muertos, o en el incendio de la residencia Juan XXIII de Aravaca, el pasado mes de febrero, con tres muertos, se aplica la ley del embudo, dejando impunes a los responsables políticos de la derecha.

Es gravísimo que los responsables políticos hagan la vista gorda, en beneficio de las empresas, y es evidente que la hacen, cuando en todos estos casos se demostraron fallos en las inspecciones: licencias indebidas, dejación en las inspecciones, puertas de emergencias bloqueadas, etc. Es la "libertad" de hacer negocio, aunque cueste vidas humanas.

Los 7.291 muertos en las residencias es un caso flagrante de impunidad. En este caso no fue dejación, que también pues a las residencias de mayores se les aplica la misma lasitud inspectora, fue una decisión política que vulneró el derecho a la vida de los residentes, en tanto que desprotegieron su salud. Los poderes públicos obviaron su obligación de tutela de la salud pública.

Si este caso queda impune y no se juzga a la responsable máxima y los miembros de su Gobierno, habrá que juzgar a los jueces que ejercen un poder judicial de parte.

Roberto Tornamira, miembro del CATP

Choque de intereses, por y contra la agricultura

Es imposible resumir la larga y dura movilización campesina. Todo el conflicto se ha concentrado en torno al Comité de Ministros de Agricultura de la UE del 26 de febrero. Después de ese comité los campesinos procedieron a acciones en las fronteras con Francia programadas por la Unión de Uniones (UU). Y recibieron mensajes de apoyo de campesinos alemanes, movilizados sin dar confianza a un comité que a día de hoy no ha aportado nada, a la espera del desarrollo de unas mesas.

Rebobinemos

El 15 de febrero el ministro Planas hacía llegar a las organizaciones de agricultores un paquete de propuestas, con vistas a la discusión europea.

El Ministerio abordaba la «flexibilización» de la PAC a la que se refirió Sánchez: suprimir obligaciones de dejar terrenos en barbecho, que dejan al agricultor sin beneficio. Y suprimir controles y burocracia asfixiantes.

También trataba de responder al campesino que ve el mercado invadido por la producción de multinacionales a muy bajo precio en países en los que se abusa de la mano de obra y se saltan todas las regulaciones. La medida estrella es introducir en los acuerdos comerciales cláusulas 'espejo'. La propia Asaja, ante la aprobación por el Parlamento (con los votos de los eurodiputados españoles) de una ley de restauración de la Naturaleza, decía: «La negativa a exigir estándares similares de producción a nuestros competidores internacionales es una traición al sector agropecuario europeo y lo coloca en una situación económica muy comprometida. […] Amenaza con convertir la agricultura y la ganadería en actividades no rentables en casi el 40 % de la superficie de España».

Pero los trabajadores de la tierra, sin ver ninguna medida del Gobierno favorable, desarrollaban la movilización. La Unión de Uniones, que no participa en las 'negociaciones' porque el Gobierno la ha excluido, recogió el sentir de los campesinos más pobres amenazados de quiebra y organizó la entrada en Madrid el miércoles 21. Fueron recibidos con barreras y hostigamiento policial, pero el Gobierno tuvo que aceptar que entrasen 500 tractores, de hecho fueron 1.000. Y se agolpaban al menos 1.000 más para entrar. Se sumaron muchos seguidores de Asaja, Coag y UPA, desoyendo a sus dirigentes. La policía secuestró en un recinto privado tractores para que no entrasen, impidió a otros que se acercasen a Madrid, y delante del Ministerio los antidisturbios atacaron a los periodistas con brutalidad insólita, para que no informasen.

La Unión de Uniones felicitó a los 10.000 que habían participado y exigió que Planas actúe «ante el hartazgo del campo, que está exhausto por unos precios que no compensan unos costes de producción encarecidos extraordinariamente […]; una PAC que en lugar de apoyar su competitividad y su rentabilidad les carga con más burocracia y más exigencias […]; frente a la competencia desleal de importaciones de países terceros que no cumplen los condicionantes obligados para las producciones europeas y españolas; y por la falta de democracia en el campo, que está hurtando a los profesionales del sector su derecho a elegir quienes les representan».

Dos días más tarde, las tres organizaciones que 'negocian', se sumaban a la manifestación del día 26 en Bruselas. «Con la unión de fuerzas de varias naciones, el sector agrario europeo espera hacer eco de sus necesidades y obtener respuestas efectivas». Y ¡ahora! decían que «le ha tocado el turno a Madrid» e iban a entrar el día 26.

Escuchemos, sin embargo, el doble lenguaje. Dice así Asaja: se movilizarán «coincidiendo con el Consejo de Ministros de la UE que debatirá posibles formas de garantizar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual a la que se enfrenta el sector agrario. Los ministros también deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC (normas de la condicionalidad reforzada) y la negociación de las cláusulas espejo». En lugar de exigir que los ministros aprueben las reivindicaciones, siembran ilusiones sin base: que los ministros discutirán sus reivindicaciones. Reflejan tal vez la ilusión de agricultores medio acomodados, que esperan les alcancen subvenciones.

Llegó el 26…

Y no hubo nada. Las cláusulas espejo fueron rechazadas por la gran mayoría de ministros. No aceptan ninguna reivindicación, porque la UE está juramentada, en el llamado Pacto Verde, a desmantelar la agricultura europea o la producción de automóviles. Todo eso es el centro de la política de la Unión Europea. Y aun con los campesinos de toda Europa levantados, regatean y se niegan como gato panza arriba.

Tienen razón los campesinos de Lérida, que no se dejan entretener por algunas concesiones locales del consejero Mascort, reclaman sus reivindicaciones y que Mascort pase a ser consejero de Agricultura, y no de «Acción Climática» contra la agricultura. Pero los Ecologistas en Acción acusan a Mascort de dar pasos atrás en la reaccionaria política 'verde' impuesta por las multinacionales. Cada cual, con los suyos.

A.Zarra

«La Unión Europea favorece a las grandes empresas y fondos de inversión»

Entrevistamos a Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders organización que agrupa a los pequeños agricultores del País Valenciano

Informacion Obrera: *¿Cómo valoráis las propuestas del ministro de Agricultura y la reunión de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas?*
Carles Peris: Las 18 medidas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, no suponen nada real ni eficaz. Son anuncios vacíos que abordan los problemas de una manera superficial y no sirven para la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor.

Del Consejo de Ministros de Agricultura de este pasado lunes en Bruselas nos llama la atención que no se haya analizado la competencia desleal de las importaciones de terceros países y la necesidad urgente de incorporar cláusulas espejo en los tratados de libre comercio. Es ilógico que la Unión Europea continúe dando la espalda a sus agricultores, favoreciendo las producciones y comercialización de terceros países sin incorporar las cláusulas espejo en los acuerdos o negando el problema. Estas cláusulas podrían servir para frenar la competencia desleal que se está generando con otros países desde hace tiempo, favoreciendo, por fin, la producción y comercialización en igualdad de condiciones.

La UE nos utiliza como moneda de cambio en temas políticos y luego también favorece a las grandes empresas y fondos de inversión que son los únicos beneficiarios de los acuerdos con terceros países, con inversiones y normativas más laxas que las nuestras. Es un abuso y un abandono continuo el que sufrimos los profesionales agrarios europeos y se pone de manifiesto que la UE solo trabaja para cuatro grandes empresas.

En este sentido desaprobamos las declaraciones del comisario de Agricultura que echa balones fuera sobre la responsabilidad europea de los acuerdos comerciales de Mercosur y Marruecos. Si esto no es política agraria, ¿qué es? Es el uso de la agricultura y la ganadería como moneda de cambio de una forma descarada. El comisario de Agricultura no ha entendido nada a pesar de tener los tractores en su puerta. Así que nuestro ministro de Agricultura mucho hablar antes del Consejo de las cláusulas, pero se vuelve igual que se fue, sin conseguir nada en un Consejo que se antojaba para la opinión pública un punto de inflexión en las movilizaciones.

A nivel estatal, lamentamos la desidia de Luis Planas al sentirse eximido de culpas por cómo está la situación del sector agrario. Hemos leído que el ministro dice que, a un problema europeo, una respuesta europea, como si él no tuviera nada que ver o no formara parte de la toma de decisiones de Europa que nos han traído hasta donde estamos. Hay muchas cosas que él sí puede hacer en otro ámbito para que el campo vaya mejor, así que nos parece que más bien quiere escurrir el bulto y pasar la patata caliente a otros.

Puerto de Castellón bloqueado por los agricultores

Es una hipocresía además que Planas apele a la necesidad de diálogo entre las instituciones europeas y los agricultores y ganaderos cuando él, en España, lo restringe al bloquear las elecciones al campo, dejando discrecionalmente fuera de la interlocución institucional a nuestra organización estatal Unión de Uniones, que ha acreditado de forma sobrada su representatividad y solvencia con su trabajo reivindicativo en estos años, en las urnas allí donde se han celebrado consultas y con el respaldo masivo e histórico demostrado en la tractorada del 21 de febrero pasado.

Pero tampoco puede eludir su responsabilidad sobre los motivos de estas protestas el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre. El nuevo equipo de Conselleria, tras siete meses en el cargo, no puede dedicarse a lanzar continuamente balones fuera, echando las culpas a Madrid y Bruselas, como si no fuera con él la cosa cuando se pueden hacer bastantes cosas en clave de política agraria autonómica.

IO: *¿Cuáles son las reivindicaciones por las que se están movilizando los agricultores y qué perspectiva tenéis al respecto?*
CP: La Unión Europea ha anunciado que rebajará los requisitos ambientales de la PAC para aliviar la carga burocrática de los agricultores, aunque habrá que ver cómo se concreta. Tenemos la legislación europea más estricta y restrictiva del mundo, pero nadie más la cumple. La pasada semana concluyó una primera serie de movilizaciones de la Unió Llauradora i Ramadera, hasta seis en menos de un mes. La masiva respuesta y participación de los agricultores es un hecho a agradecer, nunca desde hace tiempo había salido tanta gente a las calles y carreteras. Nuestras reivindicaciones siguen intactas. Por tanto, esto no ha acabado porque nada hay concretado. Si no hay soluciones urgentes para los agricultores y ganaderos, volveremos a la calle. Nos sobran sin duda los motivos.

Carles Peris detenido por la policía en la concentración del Puerto de Castellón

La Ley de la Cadena Alimentaria no cumple con uno de sus principales objetivos como es el de que el precio que perciban los agricultores y ganaderos por sus productos compense al menos sus costes productivos; los olivicultores y viticultores valencianos se han quedado fuera de las ayudas de todas las Administraciones; los cerealistas han tenido mala cosecha y bajos precios al igual que otros muchos sectores, los ganaderos siguen sacrificando animales por unos planes de sanidad irracionales y sufriendo los efectos de la falta de pastos, no se simplifica la PAC y se aprueban constantemente nuevas exigencias ambientales que nos cargan de más costes y más burocracia. Son algunos de los asuntos sin respuesta. Por otra parte, el Gobierno incumple las leyes y las sentencias de los tribunales como la del contrato de doble tarifa para el regadío cuando hay un incremento de coste por la sequía y se riega más y más caro. Sufrimos la competencia desleal de las importaciones que no respetan las normas que nos imponen a nosotros. No se atajan los daños a los cultivos ni la infección a nuestro ganado que provoca la fauna silvestre. Los seguros agrarios son cada vez más caros y protegen menos. Nada de esto se resuelve.

Martes, 27 de febrero

8 de marzo - Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Salvaje explotación de trabajadoras inmigrantes

Este mes de febrero han sido liberadas 21 trabajadoras del campo víctimas de la más salvaje explotación.

Los «empresarios» captaban en sus países de origen a las víctimas, de nacionalidad moldava y rumana, a través de anuncios y de redes sociales donde ofertaban trabajo en España. Publicitaban condiciones laborales y salarios ficticios, muy alejados de la realidad, ya que luego se verían explotadas en una situación de extrema necesidad. Las trasladaban en autobús hasta Sevilla y dado que les pagaban el billete del viaje, las víctimas contraían una deuda que forzaba aún más su condición de vulnerabilidad.

Una vez en Sevilla, las alojaban en viviendas en condiciones infrahumanas. Los implicados las controlaban, por lo que no podían abandonar libremente las viviendas.

Las víctimas trabajaban hasta la extenuación. Los responsables no permitían a sus víctimas beber ni comer durante el tiempo de trabajo. Incluso tenían que buscar comida en la basura cuando podían para poder alimentarse.

Una de las víctimas, menor de edad, estaba embarazada y sufrió un aborto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado el papel de la Inspección de Trabajo: «La inspección laboral es fundamental para la protección de todas las personas trabajadoras. Una vez más se demuestra que la inspección salva vidas. Seguimos trabajando».

Sin embargo, sabemos cómo actúa la patronal «contratando en origen» con el beneplácito del Estado, convocatoria tras convocatoria de temporeras para trabajar en el campo español, a pesar de las múltiples denuncias.

Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas.

Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos.

Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.

Esclavitud temporal con garantía de vuelta.

Colectivo de Mujeres Republicanas

Gaza: el hambre como arma de guerra

Hoy, 21 de febrero, la ONU ha anunciado la suspensión de la ayuda alimentaria en el norte de Gaza, tras advertir de que la región estaba sumida en «el caos y la violencia». El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reanudó las entregas en la zona el domingo después de una pausa de tres semanas, pero manifestó posteriormente que su convoy estaba «enfrentando un caos total y violencia debido al colapso del orden civil».

«La decisión de suspender las entregas al norte de la Franja de Gaza no se tomó a la ligera, ya que sabemos que significa que la situación allí se deteriorará aún más y más personas corren el riesgo de morir», ha declarado un portavoz de la agencia.

En el conjunto de la Franja de Gaza, el PMA advirtió el lunes de que la alarmante falta de alimentos, la desnutrición desenfrenada y la rápida propagación de enfermedades podrían conducir a una «explosión» en el número de muertes infantiles en la Franja de Gaza. Según el informe del Grupo Mundial de Nutrición (GNC, por sus siglas en inglés) sobre la situación en Gaza, el 90% de los niños menores de 5 años están afectados por una o más enfermedades infecciosas y el 70% han tenido diarrea en las últimas dos semanas.

Según los datos disponibles, el 81% de los hogares carecen de agua potable y limpia, con un acceso promedio por hogar a menos de un litro de agua por persona al día. El 90% de los niños menores de 23 meses están gravemente desnutridos.

Cientos de miles de palestinos esperan harina y ayuda humanitaria de solo 4 camiones que lograron entrar en el norte de Gaza.

Israel está repitiendo en Gaza lo que el gobernador nazi de Varsovia, el *gauleiter* Hans Frank, ordenó para el gueto de Varsovia. Frank ordenó un racionamiento de alimentos con el reparto siguiente: a los soldados alemanes del Ejército alemán y las SS les correspondían 2.130 calorías por día, a los extranjeros de países neutrales 1.790 calorías, a los ciudadanos polacos 634 calorías y a los judíos 184 calorías. Recurriendo al contrabando, los judíos del gueto apenas llegaban a las 800 calorías.

No es lo único en que siguen el ejemplo de Hans Frank. Hay que recordar que el 22 de julio de 1942, las fuerzas nazis entraron en el gueto y destruyeron los hospitales y otros servicios críticos.

¿Es necesario recordar al Gobierno de Israel y a sus aliados (Estados Unidos, la Unión Europea, España…) que el artículo 14 del protocolo adicional de la Convención de Ginebra establece que «está prohibido matar de hambre a civiles como método de combate»?

Solo queda una pregunta: ¿Hasta cuándo los Gobiernos «aliados» de Israel -incluido el «Gobierno progresista» español- van a consentir el genocidio sin romper relaciones diplomáticas, militares y comerciales con el Estado de Israel?

Luis González

Memoria democrática y laicismo, incompatibles con la Monarquía

Hay cosas que pasan que ponen en entredicho más que otras el supuesto atado y bien atado institucional en que se desenvuelve la población de todos los pueblos del Estado español, y el 45 aniversario de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede (Estado del Vaticano) es una de ellos.

Ya se han cumplido el 3 de enero 46 años desde entonces y a los hechos me remito. El poder económico e institucional de la Iglesia católica no ha cesado de crecer, y a su sombra los de otras organizaciones religiosas.

Juan Antonio Aguilera Mochón, miembro de la Junta Directiva de la asociación Europa Laica escribió para ese funesto aniversario un artículo que va directo al fondo la cuestión, ya desde el título[1]: "La memoria democrática exige un Estado laico y para ello la revocación de los acuerdos con la Santa Sede".

Vale la pena tomar de su análisis algunas cuestiones para incorporarlas al día a día de las acciones que en la vía de la democracia, que solo puede ser republicana, desarrollamos.

"(…) Con motivo de esta efeméride, quiero mostrar cómo la pervivencia de esos Acuerdos y, en definitiva, de la situación de confesionalidad de hecho del Estado español, contraviene la denominada 'memoria histórica' o 'memoria democrática'.

El 19 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática (LMD), que palió deficiencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, algo muy de celebrar, pero que aún quedó lejos, en varios aspectos, de ser suficiente, a pesar de la autocomplacencia de los partidos políticos que la sacaron adelante, y del rechazo de la derecha ultramontana (…).

Recordemos que la *memoria* de que estamos hablando es la del funesto franquismo, y cabría esperar que de su principal seña de identidad ideológica, el nacionalcatolicismo.

La memoria histórica y democrática no debe olvidar ese fundamento nacionalcatólico del franquismo, por el cual la ideología católica fue consustancial con la dictadura, y la Iglesia cómplice activa tanto del golpe de Estado de 1936, como de la represión y los crímenes franquistas (…).

Sin embargo, según denuncian asociaciones memorialistas, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) o el Ateneo Basilio Lacort, la LMD ni siquiera menciona en ningún momento a la Iglesia católica o al nacionalcatolicismo. Con ese asombroso *olvido*, hablar en la ley de 'verdad, justicia y reparación' suena a broma de mal gusto.

El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, firma la renovación del Concordato en enero de 1979 junto al cardenal Giovanni Villot, secretario de Estado vaticano

Retornando a la LMD. Como dice el Ateneo Basilio Lacort: 'En buena lógica, si el franquismo queda declarado ilegal en la ley, ¿cómo no se hace lo propio con dichos acuerdos franquistas?'".

Los monárquicos de derechas y de izquierdas nos hacen trampas, pero sabemos verlas y combatirlas.

Mikel González, afiliado a Europa Laica (Bilbao)

1- https://laicismo.org/la-memoria-democratica-exige-un-estado-laico-y-para-ello-la-revocacion-de-los-acuerdos-con-la-santa-sede/288896

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

• Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arrizabalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

C/ DESENGAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01
io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Calendario Republicano 2024

Información Obrera difunde como material de apoyo, un bonito calendario republicano para el año 2024.

Puedes pedirlo en nuestro correo: io@informacionobrera.org o a cualquiera de nuestros distribuidores.

¡Reserva tu ejemplar!

¡Apoya, lee y difunde la prensa obrera!

Brasil: ¡Relaciones diplomáticas con Israel, ¿para qué?!

El 17 de febrero, en la Conferencia de la Unión Africana en Etiopía, el presidente Lula declaró: «En la Franja de Gaza no hay una guerra, sino un genocidio (...) Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. De hecho, lo hubo: cuando Hitler decidió matar a los judíos (...). No es una guerra entre soldados y soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños».

¡Lula tiene razón! Es correcto comparar la situación en Palestina con el genocidio de los judíos por parte de los nazis, porque lo que está ocurriendo allí es una carnicería y una limpieza étnica. El sionismo no es judaísmo, y es por eso que muchos judíos de todo el mundo se levantan contra el genocidio diciendo «no en nuestro nombre».

En menos de 5 meses, el Estado sionista de Israel ha matado a 30.000 personas. El 70% eran mujeres y niños. Más de 60.000 personas han resultado heridas. Son 12.000 menores muertos. 10 niños son amputados por día.

Israel ha bombardeado 34 hospitales, 104 escuelas y universidades. ¡Todo esto ante los ojos de todo el mundo!

El Gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu rechazó el alto el fuego y declaró a Lula «persona non grata», de lo que se hicieron eco los histéricos medios de comunicación proisraelíes y pro-Biden en Brasil. Celso Amorim respondió a la ofensa con orgullo: «Persona non grata es Israel». Muy correcto.

Lula en la conferencia de la Unión Africana en Adís Abeba

Aislado, pero apoyado por Biden, Netanyahu no escucha y continúa atacando.

Ahora llega el momento de romper las relaciones diplomáticas con Israel. Es una cuestión de dignidad y soberanía, de justicia y de paz.

Bajo el mandato de Bolsonaro, los acuerdos de adquisición de armas con Israel han prosperado como nunca antes. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas aprovecharon la oportunidad.

No es sorprendente que los partidarios del genocidio aquí apoyen el «derecho de Israel a defenderse». Léase: derecho a cometer genocidio allí.

Pero no son los únicos. Llama la atención que entre los que firmaron la petición de destitución de Lula por el episodio se encuentran al menos 20 parlamentarios de partidos de la base del gobierno de Lula.

Es igualmente notable que el presidente del Senado y «aliado» Rodrigo Pacheco exija que Lula se retracte.

Esta demostración inequívoca de que los «aliados» de la burguesía proimperialista solo sirven a sus propios intereses debería ayudar a aclarar que el fracaso del intento golpista del genocidio brasileño no se obtuvo gracias al «frente amplio», menos firme que un flan.

De hecho, a Biden no le interesaba la reelección de un trumpista en Brasil, es cierto, y presionó a los militares contra el golpe, enviando cuatro figuras de su cúpula militar en un año.

Pero aun así, la razón principal del fracaso del objetivo del golpe fue el pueblo en las calles desde la campaña – con énfasis en las manifestaciones del 30 de octubre de 2022 en la avenida Paulista y del 1 de enero de 2023 en Brasilia – asegurando la victoria electoral, la toma de posesión y, así, evitando el golpe.

Esta semana, un líder del Gobierno, el petista (!) Jaques Wagner criticó a Lula por la comparación entre genocidios.

Por otro lado, el candidato a la alcaldía de São Paulo apoyado por el PT, Guilherme Boulos (PSOL), declaró que «no soy comentarista de Lula», «no soy candidato a la alcaldía de Tel Aviv». ¡Muy amigos, los oportunistas!

La situación exige firmeza. Empezando por las manifestaciones contra el genocidio del pueblo palestino de esta semana y del 8 de marzo. Diálogo y Acción Petista llevará a las calles las consignas específicas de las mujeres trabajadoras, la exigencia de castigo para Bolsonaro y todos los generales golpistas y la cuestión del momento, como el mejor apoyo que se le puede dar a Lula en este momento: ¡Solidaridad con el pueblo palestino! ¡Alto el fuego ya! ¡Ruptura de relaciones diplomáticas con Israel!

Editorial de O Trabalho n.º 928

Polonia: reunión del comité «Contra la Guerra - Contra la Guerra Social»

El 17 de enero de 2024, se llevó a cabo una reunión del Grupo de Iniciativa Polaca del Comité de Enlace Europeo «Contra la Guerra - Contra la Guerra Social» en Varsovia. Asistieron a la reunión: Kamil Łukaszek, periodista y activista; Beata Machul-Telus, PhD, científica, política y educadora, presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Sociedad Civil PRO HUMANUM; Maciej Wisniowski, PhD, reportero, fundador y editor en jefe del portal de información «Strajk.eu»; Agnieszka Wolk-Laniewska, columnista de «Tygodnik NIE».

El Comité de Enlace fue representado por Gotthard Krupp.

La tarea establecida por el Grupo de Iniciativa es iniciar una discusión en nuestro país sobre la conveniencia y los costes de la carrera armamentista, que Polonia está empezando a liderar. Con un nivel de gasto en armas que supera el 4 % del PIB, ocupamos el primer lugar en la OTAN en términos de la cantidad relativa de inversión en la llamada defensa. Existe un consenso entre los políticos y comentaristas polacos de que esto es algo de lo que sentirse orgulloso, nadie cuestiona la conveniencia de este gasto. El tema de los costes sociales de la participación en la carrera armamentista y los recortes inevitables en los servicios sociales y programas sociales del Estado polaco no se discute en absoluto. Queremos cambiar esto; queremos ser el fermento del debate público en torno a las opciones que enfrenta la sociedad polaca en el contexto de la guerra en Ucrania.

Estamos convencidos de que un estado de bienestar, un estado que funcione bien y satisfaga las necesidades de sus ciudadanos, solo es posible en condiciones de paz. Creemos que prolongar la guerra es tan inmoral como iniciarla. En la realidad de la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia, sostenida y alimentada por Occidente, decimos no a ambas partes: tanto a la agresión imperial de Putin como a la respuesta agresiva de la OTAN.

El colectivo de Occidente, especialmente los Estados Unidos de América, tiene interés en prolongar esta guerra, que otras personas libran.

Los ciudadanos de los países occidentales no tienen influencia en lo que sucede en las líneas del frente. Solo tenemos influencia sobre los gobiernos en nuestros países. Debemos presionar a los gobiernos democráticos de los países que contribuyen a la escalada del conflicto y buscan introducir una economía de guerra que destruye la economía y el futuro de nuestras sociedades.

Actualmente hay 27 conflictos armados en el mundo. Además de los de alto perfil que son de interés para la opinión pública occidental, como en Ucrania y Gaza, hay enfrentamientos en Afganistán, Líbano, Yemen, Myanmar y Etiopía... 2 mil millones de personas viven en una zona de guerra hoy. Por eso creemos que es tan importante decir que «paz» no es una palabra sucia. La paz es la única perspectiva de la humanidad. Sin paz, se perderán todos los logros de la civilización europea de las últimas décadas.

La voz por la paz suena débil en Polonia hoy: cualquiera que se atreva a hablar de paz es acusado de actuar en interés de Rusia. Sin embargo, creemos que con el aumento de la guerra social, la injusticia asociada y la desigualdad, cada vez más ciudadanos polacos comenzarán a entender que la única forma de resolver el conflicto en el este de nuestro país es la paz.

Debemos estar intelectual y moralmente preparados para tal discusión.

Kamil Łukaszek
Beata Machul-Telus
Maciej Wisniowski
Agnieszka Wołk-Łaniewska

Rumanía: Llamamiento sindical al cese del genocidio en Gaza y el alto el fuego en Ucrania

Durante el fin de semana del 23 al 25 de febrero se celebró en Craiova (Rumania) una conferencia intersindical de carácter internacional en la que pude participar como invitado junto a un compañero francés que acudió en calidad de representante sindical. El acto estaba organizado por Hermes, una federación sindical rumana que consiguió aglutinar a más de treinta conferenciantes que representaban a sindicatos de diferentes áreas como la agricultura, la sanidad, la educación, los medios de comunicación o los profesionales del arte, así como a varios representantes de movimientos sociales.

La conferencia quedó articulada en torno a diferentes mesas de trabajo en las que se discutieron diversos temas, entre los que cabe destacar la escalada belicista, el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora en Europa y la estrategia organizativa de la clase asalariada.

Las dramáticas consecuencias de la escalada belicista justifican el hecho de que fuera uno de los temas centrales del encuentro, identificando su vínculo con la fase de crisis crónica que atraviesa el capitalismo. Se reivindica la necesidad de que la clase trabajadora luche contra la guerra imperialista, apoyando a los pueblos oprimidos y masacrados, como el palestino. Por eso, se valoró positivamente la actuación del Comité europeo contra la guerra para estructurar la oposición de la clase frente al militarismo y se reconoció la necesidad de que las organizaciones sindicales promuevan actos de protesta contra la guerra.

Además, se pusieron en común las diferentes vías mediante las que el capital debilita las condiciones de vida de la clase trabajadora en Europa. Se identificaron tendencias compartidas por todos los países representados en el encuentro: degradación de las relaciones laborales, deterioro salarial, degradación de los sistemas públicos sanitarios y educativos, encarecimiento del precio de la vivienda,… Los compañeros rumanos enfatizan las dificultades por las que atraviesan los pequeños campesinos para vivir de su trabajo. La recuperación del marco de disciplina fiscal en la Unión Europea junto al compromiso adquirido con la OTAN para reforzar los gastos militares despliegan un escenario especialmente preocupante para los trabajadores en Europa. La defensa de sus intereses requiere la ruptura de los acuerdos establecidos con las instituciones del capital, exigiendo que se dejen de dedicar recursos para alimentar a la industria militar y se reorienten para reforzar los gastos sociales.

También se discutió sobre la orientación que debe tomar la acción sindical para servir de herramienta de lucha para la clase trabajadora. En este sentido se comparte la necesidad de reivindicar las medidas que impliquen mejores condiciones de vida para los trabajadores de manera incondicional, sin ningún tipo de compromisos con los Gobiernos, sean del color que sean. Así como de presionar para recuperar el control democrático de estas organizaciones, con el objetivo de superar la fragmentación que en muchos sindicatos se puede apreciar entre sus movimientos de base y las direcciones.

Asimismo, se discutió sobre la necesidad de conformar un partido de clase que ejerza una función complementaria a la del sindicato para reforzar la lucha de la clase trabajadora. La labor de este partido no puede quedar orientada a fines meramente electoralistas, advirtiendo del riesgo de esa alternativa por la que han optado algunos partidos de la denominada nueva izquierda en Europa.

Las discusiones mantenidas a lo largo del encuentro son fructíferas, de manera que se concretaron en dos iniciativas consideradas de enorme valor. En primer lugar, se elaboró un manifiesto para exigir la paralización del genocidio en Palestina y el cese de la guerra en Ucrania, que fue traducido a varios idiomas y darle difusión a través de diferentes medios de comunicación. En segundo lugar, las organizaciones rumanas que participaron en la conferencia, alcanzaron un acuerdo para constituirse como partido de clase a través de una plataforma denominada LEFT. Esta propuesta es muy valiosa ya que promueve la defensa de los intereses de la clase trabajadora rumana de manera organizada.

Francisco Javier Murillo,
afiliado a CCOO y delegado en la conferencia

Estados Unidos: la Coalición Sindical Nacional por el Alto el Fuego representa al 60 % de los afiliados del país

Siete sindicatos nacionales estadounidenses acaban de anunciar la formación de una Coalición Sindical Nacional por el Alto el Fuego, incluyendo asimismo a numerosas estructuras locales. Entre los miembros de esta coalición están los tres sindicatos nacionales más grandes de Estados Unidos (el sindicato de docentes NEA, el del sector servicios SEIU, y el de profesores AFT, el mayor sindicato de la confederación estadounidense AFL-CIO). En total, los sindicatos miembros de esta coalición agrupan a 9 millones de afiliados, es decir, el 60 % de los afiliados en Estados Unidos.

Es el resultado de una batalla librada palmo a palmo en las organizaciones sindicales norteamericanas. Desde el inicio del asalto de Israel a Gaza, algunos sindicatos se pronunciaron por un alto el fuego inmediato: sindicatos locales de docentes, de estibadores, etc. El sindicato de electricistas UE tomó la iniciativa de un llamamiento nacional, señalando el papel del gobierno Biden en la situación de la Franja de Gaza, y concluyendo así: «Corresponde ahora al movimiento obrero hacer oír su voz y exigir un alto el fuego. Juntos, podemos levantarnos por la justicia y por un futuro mejor para los trabajadores del mundo entero».

Llamamiento que firmaron el sindicato de trabajadores del automóvil UAW, que acaba de arrancar sustanciales aumentos para los trabajadores del sector tras cuarenta días de huelga, el sindicato de marinos comerciales AFA, el sindicato de enfermeros NNU. Son sindicatos combativos, que recurren regularmente a la huelga en defensa de los intereses de sus miembros. El llamamiento se apoya explícitamente en la toma de posición de trece miembros del Parlamento estadounidense que, siguiendo a Rashida Tlaib, representante demócrata miembro de la organización socialista DSA, exigen al gobierno Biden un alto el fuego. Esta batalla en los sindicatos ha arrancado también pronunciamientos de la NEA, del SEIU y de la AFT por un alto el fuego, aunque menos explícitos respecto del papel de Estados Unidos y su gobierno. Y finalmente ha logrado que la confederación sindical AFL-CIO se pronuncie por un alto el fuego.

Un elemento de ruptura con el Partido Demócrata

La formación de esta coalición es un nuevo avance en este combate. Aunque esos tres grandes sindicatos no han firmado formalmente el llamamiento impulsado por UE, participan en una coalición que llama a firmarlo, y ha organizado el 22 de febrero un seminario virtual con los presidentes de la UAW y del NEA, y con los parlamentarios demócratas Rashida Tlaib y Summer Lee, apoyados por DSA. El Partido Demócrata de Joe Biden depende de los sindicatos para sus campañas electorales: necesita sus finanzas, su capacidad de movilizar a los afiliados para llevar sus campañas y la base electoral que representan; y la mayor parte de los sindicatos se han prestado de muy buen grado a ese papel durante decenios, ya se trate de la confederación AFL-CIO, ya de sindicatos como el NEA o el AFT. Si en este momento no hay una ruptura como tal con el Partido Demócrata, esta denuncia de la política del gobierno Biden sobre una cuestión de política internacional es una cuña clavada en el dispositivo habitual del apoyo sindical a los demócratas. En una situación en la que Biden es candidato a la reelección, y su único oponente en la investidura demócrata es un parlamentario que ha votado todas las medidas de su gobierno. Rashida Tlaib ha llamado a votar en blanco en la primarias demócratas para oponerse al apoyo al Gobierno Biden. El apoyo de la coalición sindical a su posición sobre Gaza refuerza la ruptura con el gobierno Biden

El Partido Demócrata está en crisis. No ha conseguido encontrar otro candidato que un Biden, debilitado por la edad; si bien conserva el apoyo formal de los principales sindicatos estadounidenses, sus bases no tienen ninguna confianza en él, y llevan a sus direcciones a tomar distancias con el gobierno. Es imposible prever el desarrollo de los acontecimientos que tendrán lugar de aquí a las elecciones presidenciales del próximo noviembre y los que de ellas resultarán. Pero la existencia misma de esta coalición es un punto de apoyo importante para la independencia sindical en Estados Unidos.

Devan Sohier

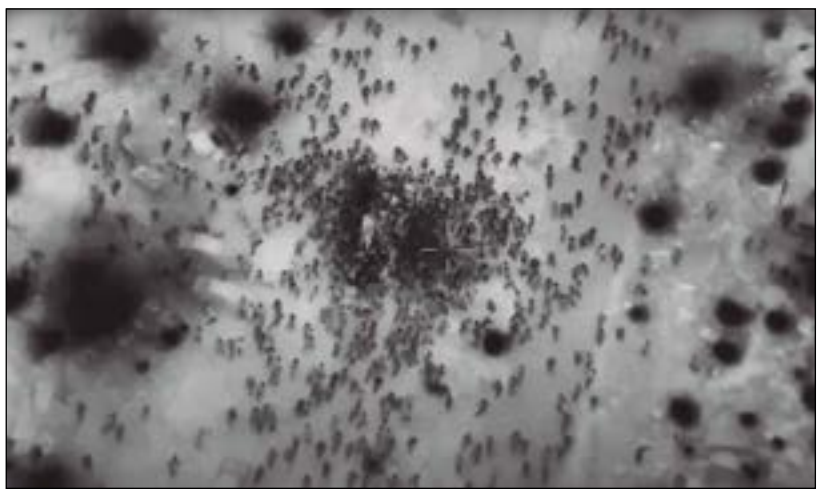
Suspensión de la financiación de la UNRWA

La contundencia de los hechos no deja hueco para interpretaciones. Pero, por si alguien pudiera albergar alguna duda sobre lo que está sucediendo, la claridad con la que hablan los dirigentes sionistas pone muy difícil a sus cómplices (por acción o por omisión) esgrimir la más mínima justificación. «Tenemos que asegurarnos de que no vuelvan nunca», decía Ben Gurion en 1948, recién creado el Estado de Israel a costa de la expulsión de 800.000 palestinos, que no debían nunca pretender siquiera regresar a sus casas y tierras arrebatadas. La expresión tristemente célebre que el Ejército sionista utiliza para referirse a sus incursiones mortíferas que arrasan con todo, niños incluidos, no puede ser más descriptiva: «cortar el césped».

El pasado 1 de febrero, Eylon Levy, portavoz del Gobierno israelí, escribía que el derecho al retorno equivaldría a un «derecho ilimitado de inmigración palestina», pretendiendo así convertir a los palestinos en extranjeros en su propia tierra. Es ahí donde hay que buscar la explicación de que Israel haya acusado a un puñado de empleados de la UNRWA, organización que cuenta con más de 30.000 empleados, de connivencia con Hamás. La UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) se creó el 8 de diciembre de 1949, es decir, un año después de la adopción de la resolución 194 que inscribía en el derecho internacional el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Durante 75 años, la agencia ha acompañado a los palestinos de Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, particularmente en el ámbito de la sanidad y en el de la educación.

Pero, para el Estado sionista de Israel, hablar de refugiados es una falacia, y la mera existencia de una agencia internacional creada para asistir a esos «inexistentes» refugiados supone una amenaza. Así, el ministro israelí de Exteriores decía recientemente: «La UNRWA, implicada con las actividades terroristas de Hamás en Gaza, perpetúa la falsa narrativa de que los "refugiados" palestinos necesitan regresar a Israel».

La UNRWA reparte alimentos en uno de sus almacenes en Gaza



1 de marzo: masacre del pan. Israel bombardea a la población de Gaza mientras recoge comida

16 países han suspendido la financiación a la UNRWA

Este proceder inicuo no sorprende a nadie, pero tal vez algunas personas sí puedan sorprenderse ante el hecho de que 16 países hayan suspendido la financiación a esta agencia de la ONU respondiendo a esa denuncia, para la que además no se han aportado pruebas. Entre esos países están los principales donantes, Estados Unidos y Alemania, pero también Francia, Canadá, Reino Unido, Italia, Austria, Países Bajos, Finlandia, Rumanía, Australia, Estonia, Letonia, Lituania, Japón... Todos estos Gobiernos cuyo talante democrático es, dicen ellos, incuestionable, han decidido condenar a muerte por hambruna a una población inerme.

Noruega e Irlanda han confirmado que no seguirían a esos países. El ministro noruego de Asuntos Exteriores declaraba: «La situación de la población de Gaza es catastrófica y la UNRWA es la organización humanitaria más importante».

Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, considera que es incomprensible la decisión de cortar la financiación: «Los palestinos de Gaza no merecen este nuevo castigo colectivo». Desde el 7 de octubre fecha de la operación de Hamás, el Ejército israelí ha matado, casi siempre de manera deliberada, a 154 miembros de la UNRWA. Unos pocos más que la docena de miembros supuestamente ligados a Hamás. Los Estados que con tanta celeridad acuden a castigar a todo un pueblo por una denuncia sin pruebas, no han manifestado la menor protesta por esos 154 asesinatos.

Otros 253 miembros han sido heridos, 141 instalaciones dañadas parcial o totalmente, entre ellas gran parte de las 183 escuelas gestionadas por la agencia. Hoy no quedan más que 4 centros sanitarios de la UNRWA de los 22 que había en funcionamiento antes del 7 de octubre.

Para Jeremy Corbyn, antiguo dirigente del Partido Laborista, la suspensión de la financiación de la UNRWA es un castigo colectivo: «Nuestro Gobierno debería avergonzarse por su depravación moral hacia los palestinos que mueren de hambre».

Francesca Albanese, abogada y relatora especial de las Naciones Unidas, califica a los países que suspenden su financiación a la UNRWA de «totalmente irresponsables e inmorales».

Liquidar la UNRWA, dispositivo surgido del «derecho internacional», es participar en el genocidio en marcha y en la limpieza étnica de la Franja de Gaza.

Isabel Cerdá

Me abono a INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: ..... DIRECCIÓN: .....

CODIGO POSTAL: ..... POBLACIÓN: ..... TELÉFONO: ..... FECHA: .....

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA ES83 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 € ❒
12 NÚMEROS: 18 € ❒
24 NÚMEROS: 36 € ❒
PDF, 24 NÚMEROS: 15 € ❒

www.informacionobrera.org